

*La traducción de esta página es automática [\[Enlace\]](#). Las traducciones automáticas pueden contener errores que menoscaben la claridad y la exactitud del texto. El Defensor del Pueblo declina toda responsabilidad por las eventuales discrepancias. Para asegurarse de que dispone de información fiable y *[disfruta de]* seguridad jurídica, consulte la versión original en inglés cuyo enlace aparece arriba. Para ampliar información, consulte nuestra [política en materia de idiomas y de traducción \[Enlace\]](#).*

Decisión del Defensor del Pueblo Europeo sobre la investigación de propia iniciativa OI/3/2003/JMA relativa a la Comisión Europea

Decisión

Caso OI/3/2003/JMA - Abierto el 19/11/2003 - Decisión de 04/07/2007

Las personas con discapacidad se enfrentan a una amplia gama de obstáculos que les impiden alcanzar la igualdad de oportunidades, la independencia y la plena integración económica y social. A pesar de que la Unión había respondido a este desafío adoptando una serie de iniciativas jurídicas y políticas para eliminar esos obstáculos, el Defensor del Pueblo consideró que la gravedad de la situación de las personas con discapacidad exigía que los compromisos proclamados se pusieran en práctica mediante acciones eficaces. Debido al papel central de la Comisión en el marco institucional de la Unión y a sus compromisos específicos con respecto a las personas con discapacidad, el Defensor del Pueblo consideró útil revisar las acciones emprendidas por esta institución en este ámbito y evaluar si eran o no coherentes con sus obligaciones jurídicas y compromisos declarados. Por lo tanto, el Defensor del Pueblo decidió abrir una investigación de propia iniciativa sobre el tema de la integración de las personas con discapacidad por parte de la Comisión, a fin de garantizar que estos ciudadanos no fueran discriminados en sus relaciones con la institución. Pide a la Comisión que informe sobre i) las medidas que ha adoptado o se propone adoptar para garantizar que las personas con discapacidad no sean discriminadas en sus relaciones con la institución, así como ii) el calendario para su adopción.

La investigación del Defensor del Pueblo se llevó a cabo a través de un diálogo abierto y transparente en el que se invitó a personas con discapacidad, grupos representativos, otros defensores del pueblo a nivel nacional y regional, y al público a participar.

Sobre la base de su revisión, el Defensor del Pueblo considera que la Comisión ha hecho un verdadero esfuerzo para integrar a las personas con discapacidad, incluso si determinados aspectos de su política no parecen haber satisfecho las expectativas del público. El Defensor



del Pueblo reconoce que se han logrado progresos en varias esferas, entre ellas las siguientes:

(1) garantizar que el empleo de personas con discapacidad por parte de todas las instituciones de la UE respete los principios fundamentales consagrados en el nuevo Estatuto, como la no discriminación por motivos de discapacidad (artículo 1 quinquies, apartado 1), o la necesidad de proporcionar a los funcionarios con discapacidad ajustes razonables para que puedan desempeñar las tareas que se les asignan (artículo 1 quinquies, apartado 4);

(2) Los candidatos a concursos de la UE con discapacidad pueden ahora beneficiarse de una serie de medidas para facilitar su participación; además, la Comisión se ha comprometido a explorar los diversos medios por los que se puede promover la contratación de personas con discapacidad dentro de la institución;

(3) la adopción de nuevos requisitos relativos a la accesibilidad de los locales de la Comisión, plenamente en consonancia con las normas establecidas por la legislación de la UE y Bélgica, y que aborden específicamente las necesidades de las personas con discapacidad;

(4) hacer que la información sea más accesible para las personas con discapacidad, en particular por lo que se refiere a los datos publicados en el sitio web de la Comisión; la institución ha realizado esfuerzos encomiables en este sentido;

(5) La Comisión ha hecho esfuerzos para que sus servicios estén más en sintonía con las dificultades con que tropiezan las personas con discapacidad, de modo que puedan responder adecuadamente, si es necesario. En este sentido, el Código de Buenas Prácticas de la Comisión debe ser un instrumento muy útil para sensibilizar a su personal, aunque deben hacerse esfuerzos para garantizar el pleno respeto y actualización periódica de las normas de conducta.

El Defensor del Pueblo es consciente de que, como subrayó el público durante el proceso de consulta, sigue siendo necesario actuar en otros ámbitos, entre ellos los siguientes:

1) La ayuda financiera prestada por la Comisión a funcionarios con discapacidad o con familiares discapacitados sigue considerándose insuficiente; el público también considera que debería aumentarse la dotación presupuestaria para los costes relacionados con la discapacidad;

2) las medidas adoptadas para promover la contratación de personas con discapacidad parecen carecer de transparencia y se ha solicitado una evaluación más fiable de la situación;

(3) también parece haber insatisfacción con la insuficiente accesibilidad de determinadas personas con discapacidad a la información de la Comisión;

(4) la situación de los alumnos con discapacidad en las Escuelas Europeas parece insuficiente y la política de las Escuelas para la integración de esta categoría de niños no parece haber contribuido eficazmente a su integración;



(5) La aplicación del Código de Buenas Prácticas de la Comisión ha puesto de manifiesto una serie de deficiencias, en particular por lo que se refiere al número insuficiente de medidas adoptadas para sensibilizar al personal de la institución mediante cursos de formación o seminarios.

El Defensor del Pueblo es consciente de que la Comisión ha asumido una serie de compromisos para abordar las preocupaciones públicas mencionadas. El Defensor del Pueblo observa que la Comisión se ha comprometido a:

- (1) proporcionar el reembolso íntegro de los costes relacionados con una desventaja; a condición de que la Autoridad Presupuestaria ponga a disposición fondos suficientes y de que se alcance un acuerdo interinstitucional;
- 2) considerar la posibilidad de publicar informes más generales sobre la contratación de personas con discapacidad y en ellos deberían incluirse estadísticas existentes y futuras;
- (3) adoptar nuevas normas sobre la accesibilidad de sus instalaciones a las personas con discapacidad y aumentar el número de plazas de aparcamiento para personas con discapacidad, ya sea en todos sus edificios o cerca de ellos;
- 4) organizar en el futuro acciones específicas de sensibilización mediante sesiones de formación y conferencias o seminarios para el personal.

Habida cuenta de los compromisos de la Comisión, el Defensor del Pueblo considera que, en la actualidad, no parece necesario adoptar nuevas medidas en relación con los aspectos mencionados.

No obstante, el Defensor del Pueblo considera que, en lo que respecta a la situación de los alumnos con discapacidad en las Escuelas Europeas, la situación actual sigue siendo insatisfactoria. Por lo tanto, con el fin de seguir de cerca la evolución de esta situación en un futuro próximo, el Defensor del Pueblo considera necesario que la Comisión informe antes de finales de 2007 sobre los progresos realizados por las Escuelas Europeas en materia de integración de los niños con discapacidad. Este informe permitirá al Defensor del Pueblo decidir si es necesario adoptar nuevas medidas en relación con esta cuestión.

El Defensor del Pueblo espera que los resultados de su iniciativa ayuden a la Comisión a reevaluar algunas de sus acciones en este ámbito, con vistas a corregirlas, en caso necesario, y, al hacerlo, a servir mejor a todos los ciudadanos europeos.

Estrasburgo, 4 de julio de 2007

Señor Presidente,



De conformidad con el artículo 195 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, el Defensor del Pueblo Europeo está facultado para realizar investigaciones por iniciativa propia en relación con posibles casos de mala administración en las actividades de las instituciones y organismos comunitarios.

El 19 de noviembre de 2003, le informé de mi decisión de abrir una investigación sobre el tema de la integración de las personas con discapacidad, en particular por lo que respecta a las medidas adoptadas por la Comisión para garantizar que las personas con discapacidad no fueran discriminadas en sus relaciones con la institución. Le pedí que presentara un dictamen antes del 29 de febrero de 2004.

El 3 de marzo de 2004, la Comisión me envió su dictamen, que posteriormente se publicó en el sitio web del Defensor del Pueblo. El 16 de marzo de 2004, envié una copia del dictamen de la Comisión a todos los defensores del pueblo nacionales de la Unión Europea.

El 28 de abril de 2004, publiqué en mi sitio web una carta abierta en la que invité al público a enviar observaciones sobre la opinión de la Comisión. Entre mayo y septiembre de 2004, recibí un número considerable de contribuciones del público, las organizaciones no gubernamentales y los defensores del pueblo nacionales.

Sobre la base de estas contribuciones, solicité información adicional a la Comisión el 28 de octubre de 2005. El 13 de marzo de 2006, la Comisión envió su segundo dictamen, que también se publicó en el sitio web del Defensor del Pueblo. La Comisión envió información adicional el 23 de enero de 2007.

Le escribo ahora para hacerle saber los resultados de la investigación.

LOS MOTIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

En su carta a la Comisión Europea de apertura de la investigación, el Defensor del Pueblo reconoció que las personas con discapacidad constituyen una proporción significativa de la población de la Comunidad. Como han declarado públicamente tanto las instituciones europeas como los Estados miembros, este grupo de personas se enfrenta a una amplia gama de obstáculos que les impiden lograr la igualdad de oportunidades, la independencia y la plena integración económica y social (1) . Así pues, se ha instado a la Comunidad a que refuerce su contribución a la promoción de la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad, con vistas a su integración en la sociedad.

El Defensor del Pueblo expuso las iniciativas internas y externas más importantes adoptadas por las instituciones de la Unión para abordar esta cuestión.

Acciones generales



El 10 de mayo de 2000, la Comisión adoptó una Comunicación titulada «Hacia una Europa sin barreras para las personas con discapacidad» («la Comunicación»), en la que se compromete a desarrollar y apoyar una estrategia global e integrada para hacer frente a las barreras sociales, arquitectónicas y de diseño que restringen innecesariamente el acceso de las personas con discapacidad (2) . El Parlamento Europeo aprobó por unanimidad una resolución similar (3) .

El 3 de diciembre de 2001, el Consejo de la Unión Europea acordó designar 2003 Año Europeo de las Personas con Discapacidad (4) . Reconoció que seguía prevaleciendo la discriminación contra las personas con discapacidad, a menudo como consecuencia de la falta de información y de problemas de actitud. Al declarar 2003 como el año de las personas con discapacidad, el Consejo trató de aumentar la comprensión por parte de la sociedad de los derechos, las necesidades y el potencial de las personas con discapacidad, así como fomentar las sinergias entre todos los asociados a fin de promover un flujo de información y un intercambio de buenas prácticas.

La situación especial de este grupo de personas y la necesidad de medidas de apoyo se han mencionado en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, cuyo artículo 26 establece que:

« La Unión reconoce y respeta el derecho de las personas con discapacidad a beneficiarse de medidas destinadas a garantizar su independencia, su integración social y profesional y su participación en la vida de la comunidad. »

Acciones individuales de diferentes instituciones y organismos de la UE

Conscientes de los posibles problemas a los que se enfrentan las personas con discapacidad para convertirse en funcionarios de la UE o para desarrollar sus carreras como tales, las instituciones de la UE adoptaron en 1998 un «Código de buenas prácticas para el empleo de personas con discapacidad» («Código de buenas prácticas de la UE»), que proporciona una declaración de su política en este ámbito, así como directrices para sus servicios en relación con las acciones conexas (5) . El Código preveía llevar a cabo varias acciones en los siguientes ámbitos:

- Contratación : Deben adoptarse todas las medidas razonables para garantizar que las personas con discapacidad puedan participar en concursos en igualdad de condiciones con otros candidatos.
- Carreras profesionales : Se debe tener cuidado durante la carrera de un funcionario con discapacidad para garantizar que se eviten los requisitos laborales que no están relacionados con el trabajo y que podrían excluir a las personas con discapacidad.
- Entorno de trabajo : Deben considerarse todas las medidas razonables para minimizar los problemas relacionados con el acceso a los edificios, así como con el alojamiento y el equipo de oficinas.
- Información y sensibilización : El Código de Buenas Prácticas de la UE se distribuirá a todo el personal. Los miembros de los tribunales de selección recibirán cursos de formación que



incluyan la sensibilización sobre la discapacidad.

- Seguimiento : Cada institución designará a un funcionario u organismo responsable de la aplicación del Código de Buenas Prácticas de la UE.

En la Comunicación, la Comisión reiteró los compromisos establecidos en el Código de Buenas Prácticas de la UE y definió medidas adicionales destinadas a fomentar el desarrollo de las mejores prácticas por parte de sus servicios. Las acciones esbozadas fueron las siguientes:

- Empleo : La Comisión adoptará las medidas necesarias para facilitar el acceso de las personas con discapacidad a trabajar en la función pública europea (organización de concursos; desarrollo de la carrera profesional; asistencia administrativa; oficinas y edificios equipados; identificación de puestos). Alentará al personal a asistir a cursos de sensibilización.

- Accesibilidad de los locales de la Comisión : La Comisión procurará garantizar que las oficinas y las instalaciones sean accesibles para sus empleados discapacitados y para los ciudadanos que visitan sus servicios.

- Información y comunicación : La Comisión modificará sus directrices sobre el acceso a los documentos de la Comisión para garantizar que las publicaciones y la información sean accesibles para las personas con discapacidad en formatos alternativos. Del mismo modo, la Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas velará por que los ciudadanos con discapacidad tengan más acceso a su información.

- Escuelas Europeas : La Comisión apoyará los esfuerzos realizados por las Escuelas Europeas con vistas a integrar mejor a los alumnos con discapacidad.

- Coordinación interna : Los servicios de la Comisión trabajarán para desarrollar herramientas de auditoría e información relacionada con cuestiones de discapacidad. Su objetivo será elaborar orientaciones específicas para las personas con discapacidad que soliciten asistencia para obtener información sobre los programas de la UE.

Estas acciones habían sido bien acogidas por el Parlamento, que pedía la aplicación de iniciativas complementarias (6) . En particular, el Parlamento sugiere que se cree un grupo interinstitucional para examinar las condiciones de las personas con discapacidad en las instituciones de la UE en lo que respecta al acceso y la participación real en las reuniones y las condiciones adecuadas de contratación y empleo. El Parlamento pide a este grupo interinstitucional que elabore informes públicos periódicos sobre los esfuerzos realizados para aplicar el Código de Buenas Prácticas de la UE y supervisar los progresos realizados para garantizar que las personas con discapacidad, tanto los empleados como los visitantes, tengan pleno acceso a todas las instituciones de la UE. También se sugirió la elaboración de informes periódicos por todas las instituciones de la UE. Estos informes deben proporcionar información como el número de personas con discapacidad empleadas y los puestos ocupados por los que pertenecen a esta categoría.

Medidas de ejecución

El Defensor del Pueblo acogió con satisfacción los claros compromisos de la Comisión con respecto a las personas que constituyen uno de los sectores más desfavorecidos de nuestra sociedad. En opinión del Defensor del Pueblo, la gravedad de su situación exige que los compromisos proclamados se pongan en práctica mediante acciones eficaces. Una buena



administración requiere una acción rápida y eficaz para cumplir estos compromisos.

Por lo tanto, el Defensor del Pueblo consideró útil revisar las acciones emprendidas por la Comisión en este ámbito y evaluar si eran coherentes con las obligaciones jurídicas de la institución y los compromisos declarados.

El Defensor del Pueblo decidió limitar el alcance de su investigación a la Comisión, habida cuenta del papel central de esta institución en el marco institucional de la UE y de sus compromisos específicos con respecto a las personas con discapacidad, tal como se establece en su Comunicación. El Defensor del Pueblo dejó claro que estudiaría posteriormente si, a la luz del resultado de la investigación, sería necesario ampliar el alcance de la investigación e incluir a otras instituciones de la UE.

El Defensor del Pueblo solicitó a la Comisión que informara sobre: i) las medidas que había adoptado o se proponía adoptar para garantizar que las personas con discapacidad no fueran discriminadas en sus relaciones con la institución, y ii) el calendario para su adopción.

LA INVESTIGACIÓN

Dictamen de la Comisión

El dictamen de la Comisión puede resumirse del siguiente modo:

La Comisión ha subrayado que ha dado una alta prioridad a la búsqueda de la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad y ha realizado esfuerzos especiales para evitar la discriminación en sus relaciones con las personas con discapacidad, ya sean miembros del público o del personal. La Comisión reconoció que aún queda mucho por hacer para promover el derecho de las personas con discapacidad a participar plenamente en todos los aspectos de la sociedad. Declaró que seguirá buscando cambios positivos en esta esfera y que tratará de aumentar el porcentaje de personas con discapacidad entre su personal.

En particular, la Comisión se refirió a una serie de iniciativas que había adoptado en los últimos años para garantizar que el principio de igualdad de oportunidades se convierta en una realidad para su personal con discapacidad y para las personas con discapacidad que deseen participar en concursos organizados por la Comisión. Estas iniciativas deben incluir tanto propuestas legislativas como no legislativas.

Las propuestas legislativas se refieren a la modificación del Estatuto de los funcionarios, un proceso complejo y lento que, en el momento de iniciarse esta investigación de propia iniciativa, estaba a punto de concluir. Las propuestas no legislativas incluyen la prestación de servicios especiales en los concursos de contratación, cuando así lo soliciten las personas con discapacidad; la adopción de un nuevo Código de Buenas Prácticas para el Empleo de las Personas con Discapacidad; y la provisión de ciertos documentos de política en Braille.



El objetivo de la Comisión era facilitar la participación de las personas con discapacidad en las oposiciones generales. La Comisión también trató de permitir a los funcionarios discapacitados que trabajan para la Comisión, así como a los que se convierten en discapacitados durante el servicio, disfrutar de modalidades de trabajo adaptadas, cuando sea necesario, y seguir una trayectoria de desarrollo profesional de las mismas normas que todos los demás funcionarios.

La Comisión facilitó los siguientes datos:

(1) Empleo : La Comisión explicó que, en los últimos años, había adoptado una serie de iniciativas para garantizar que el principio de igualdad de oportunidades se hiciera realidad para su personal con discapacidad y para aquellos que desean participar en el proceso de contratación. A este respecto, se refirió al nuevo Estatuto de los funcionarios, que entró en vigor el 1 de mayo de 2004, y a los cambios en los procedimientos de contratación introducidos por la Oficina Europea de Selección de Personal («EPSO»).

Por lo que se refiere al nuevo Estatuto de los funcionarios, la Institución señaló que han incorporado las disposiciones contra la discriminación consagradas en el artículo 13 del Tratado CE y han incluido, en el artículo 1 quinquies, apartado 1, una declaración jurídica clara de que está prohibida toda discriminación basada, *entre otras cosas*, en la discapacidad. Estas normas han facultado a la autoridad facultada para proceder a los nombramientos para conceder todas las solicitudes razonables de «ajustes razonables» del personal discapacitado, en la medida en que dichas instalaciones no impongan una carga indebida a la institución.

En relación con la contratación de funcionarios, la Comisión explicó que la EPSO ha mejorado su publicidad sobre las perspectivas de empleo en la Comisión, con el fin de estimular el interés entre los candidatos potenciales con discapacidad. Agregó que también se han hecho esfuerzos para garantizar que los sitios web internos sean fácilmente accesibles y, cuando las personas con discapacidad tengan éxito en los concursos de contratación, se tomarán medidas positivas para ayudarlos a encontrar puestos de trabajo adecuados. Observó que sus servicios también habían publicado un informe sobre la accesibilidad del proceso de contratación de candidatos con discapacidad visual.

(2) Accesibilidad de los locales de la Comisión : La Comisión explicó que, sobre la base de un estudio realizado por sus servicios en 2002, su Oficina de Infraestructuras y Logística (OIB) había previsto llevar a cabo mejoras destinadas a facilitar el acceso de las personas con discapacidad a los locales de la Comisión. Además, una nueva versión del documento sobre las normas aplicables a estos locales debe incluir reglamentos internos para garantizar el acceso, el movimiento dentro de los edificios, la evacuación en caso de emergencia e instalaciones sanitarias.

(3) Información y comunicación : La Comisión observó que en Braille se habían elaborado una serie de documentos importantes, entre ellos el Libro Blanco sobre la reforma de la Comisión y el documento consultivo sobre la mejora de los mecanismos de trabajo para las personas con discapacidad. Estos documentos se pueden consultar en dos de sus bibliotecas. En septiembre de 2001, la institución adoptó una Comunicación sobre «eEurope 2002: Accesibilidad de los



sitios web públicos y sus contenidos", destinado a hacer que los sitios web sean más accesibles para las personas mayores y las personas con discapacidad. Ya se había empezado a trabajar para que el sitio web de EUROPA cumpliera con las normas internacionales (nivel de conformidad «A»), a pesar de que esta tarea debía llevarse a cabo en el futuro. La Comisión señaló que algunos sitios web EUROPA de alto nivel, como la página de inicio de EUROPA y la página de inicio de la Comisión, ya cumplen estos requisitos internacionales, ya que se han diseñado teniendo en cuenta la accesibilidad.

(4) Las Escuelas Europeas : La Comisión se refirió al programa educativo para alumnos con necesidades educativas especiales («SEN») establecido por las Escuelas Europeas en 1999. El programa aborda tanto el aprendizaje como las discapacidades físicas, con el fin de integrar en la vida escolar a los estudiantes del SEN, por ejemplo, a través de profesores especializados que prestan asistencia en clase a los alumnos. En consecuencia, se decide un programa a medida para cada estudiante del SEN, basado en la capacidad y las necesidades del alumno, en un consejo especial compuesto por el director, los profesores, los padres y, por lo general, un médico especialista. El resultado del consejo es un contrato, renovable anualmente, que establece las responsabilidades asumidas por cada parte. La Comisión subrayó que no existe ninguna restricción presupuestaria individual para la prestación de servicios a estudiantes con discapacidad. El número de estudiantes en el programa SEN ha aumentado cada año. Sus progresos han sido objeto de un estrecho seguimiento y en 2004 se estaba examinando una revisión del programa de 1999.

La Comisión también se refirió a la cuestión de la accesibilidad de las instalaciones de las Escuelas. Señaló que muchos de los edificios fueron construidos o adaptados para atender a personas con discapacidades físicas. Además, los locales recientemente construidos o renovados han incorporado las últimas normas de acceso para las personas con discapacidad. Aunque el acceso a los edificios de las Escuelas y su mantenimiento es responsabilidad de los Estados miembros, la Comisión se comprometió a ponerse en contacto, en caso necesario, con las autoridades competentes para garantizar la adecuada adaptación de todos los locales de las Escuelas.

(5) Coordinación interna: La Comisión mencionó su reciente revisión del Código de Buenas Prácticas, que llevó, el 25 de noviembre de 2003, a la adopción formal de un código revisado. Esta iniciativa tenía por objeto integrar una serie de cambios jurídicos provocados sobre todo por el nuevo Estatuto de los funcionarios. El Código de Buenas Prácticas revisado pretende incluir más a las personas con discapacidad. En él se prevén: I) los locales de oficina apropiados que se determinen en función de las necesidades particulares de la persona; II) procedimientos adecuados de contratación y selección para garantizar que los candidatos con discapacidad no se encuentren en situación de desventaja; III) asesoramiento especializado para candidatos discapacitados que figuren en una lista de reserva; IV) eliminación de las barreras ambientales físicas o técnicas que puedan crear problemas para el personal con discapacidad; V) i formación y sensibilización a través, entre otros medios, de cursos de formación que se ocupen de la cuestión de las discapacidades; y vi) el seguimiento continuo y la mejora de los procedimientos para la correcta aplicación de las disposiciones contenidas en el Código, que se llevarán a cabo a lo largo de la carrera de un funcionario.



La Comisión añadió que, según lo previsto en el artículo 8 del Código de Buenas Prácticas, había previsto revisar, en el transcurso de 2004, la disposición de dicho Código, a fin de establecer datos de referencia sobre su personal con discapacidad. La Comisión también anunció su intención de publicar, en el futuro, un informe estadístico anónimo basado en los datos recopilados en el transcurso de dicha revisión (7) .

Participación del público

El 28 de abril de 2004, el Defensor del Pueblo publicó en su sitio web una carta abierta en la que invitaba al público a enviar observaciones sobre el dictamen de la Comisión. En su carta, el Defensor del Pueblo señaló que todas las observaciones recibidas se incluirían en el expediente del Defensor del Pueblo sobre la investigación y, finalmente, se remitieron a la Comisión. El Defensor del Pueblo recibió un total de 56 contribuciones del público, las organizaciones no gubernamentales y los defensores del pueblo nacionales. Estas observaciones, con una extensión total de cientos de páginas, abordan detalladamente cada uno de los aspectos mencionados en el dictamen de la Comisión. Dado que, en su carta a la Comisión de 19 de noviembre de 2003 por la que se incoaba la investigación, el Defensor del Pueblo había declarado que tenía la intención de dar a conocer todos los documentos pertinentes relativos a la investigación en su sitio web, todas las observaciones del público que no tenían carácter confidencial también se publicaron en el sitio web del Defensor del Pueblo.

De acuerdo con los criterios y categorías establecidos por la Comisión en su dictamen, las observaciones formuladas por el público fueron, en resumen, las siguientes:

1. Empleo : Según algunos de los que presentaron observaciones, la opinión de la Comisión no hizo referencia a la línea presupuestaria A4301, que constituye el instrumento más importante de la institución para el apoyo financiero de los funcionarios con discapacidad, o de los funcionarios con familiares discapacitados (8) .

Parece que, en su condición de empleador, la Comisión ofrece dos formas de ayuda: i) la asistencia legal, como en el caso de los subsidios familiares, que, tal como se establece en el artículo 67, apartado 3, del Estatuto (9) , permite conceder a un funcionario el doble de la asignación por hijo a cargo normal si su hijo es discapacitado; y ii) una contribución adicional a los costes derivados de una discapacidad, mediante la línea presupuestaria A4103, conocida como «ayuda complementaria para discapacitados». La distribución de esta ayuda complementaria para discapacitados se rige por una serie de directrices provisionales que establecen que el beneficiario debe realizar una contribución en función de los ingresos familiares imponibles.

En las observaciones del público, se argumentó que el apoyo de esta línea se sigue considerando como una especie de favor, y no como un derecho. La línea presupuestaria que proporciona los fondos es provisional y los costes solo se reembolsan si se dispone de fondos suficientes. Además, en opinión de algunas de las personas que formulan observaciones, la Comisión solo reembolsa gastos bien documentados. Los beneficiarios tienen que pagar una



contribución sustancial, que bien puede constituir una discriminación en comparación con los residentes nacionales que se benefician de las disposiciones nacionales. Los ejemplos más conocidos son los costos de la educación especial para los niños discapacitados, aunque la situación es similar en lo que respecta a los gastos de transporte o tutoría.

Por lo que se refiere a la contratación de personas con discapacidad, algunas de las observaciones recibidas (10) indicaron que la Comisión no parecía ser particularmente transparente en relación con los métodos de contratación proactivos que había anunciado. Aunque la institución había señalado en su opinión que había creado un subgrupo de trabajo para publicar un informe sobre la accesibilidad de los procedimientos de contratación de candidatos con discapacidad visual, algunos de los participantes consideraron que esta iniciativa era insuficiente y que se necesitarían medidas concretas para atender las necesidades de todas las personas con discapacidad.

En opinión de algunos de los contribuyentes (11), la Comisión había presentado un panorama excesivamente positivo de las medidas que había adoptado para garantizar que las personas con discapacidad no fueran discriminadas y de los efectos positivos de estas medidas en su política de contratación. Por consiguiente, se necesita una visión más realista de la situación a fin de tener en cuenta el número de personas con discapacidad reclutadas anualmente. Esta perspectiva conduciría a una evaluación más fiable de la situación a lo largo del tiempo.

Para algunos de los contribuyentes, una política de contratación más activa de las personas con discapacidad solo podría lograrse mediante la discriminación positiva, por lo que un porcentaje específico de vacantes, por ejemplo el 5 % de las vacantes, debería reservarse a los candidatos con discapacidad (12).

2. Accesibilidad de los locales de la Comisión : Los comentarios del público en relación con este aspecto del problema fueron, en general, bastante críticos con la política de la Comisión. Se afirmó que la institución se negó injustificadamente a participar en una auditoría global de accesibilidad de todas las instituciones de la UE, iniciada por el Parlamento en 2003. Una serie de participantes también señalaron que la Comunicación de la Comisión sobre la política inmobiliaria y las infraestructuras en Bruselas (13) había prestado poca atención a la cuestión de la accesibilidad para las personas con discapacidad (14).

Algunos de los que hicieron comentarios también mencionaron la necesidad de que la Comisión adopte planes globales de accesibilidad para las personas con discapacidad en todos sus locales, con objetivos claramente definidos a medio y largo plazo (15).

3. Información y comunicación : Algunas de las observaciones enviadas por el público subrayaron la necesidad de que la Comisión asuma un papel más proactivo en la difusión de información en toda Europa (16).

Según algunos de los que presentaron observaciones, la Comisión debería reconocer que no solo las personas con discapacidad visual pueden requerir información en formatos accesibles, sino también otros grupos de discapacidad, como las personas con discapacidad del



aprendizaje, las personas sordociegas y sordas (17) .

El acceso de las personas con discapacidad a los contenidos de los sitios web de la Comisión constituye un foco de gran interés entre el público. Se sugirió que los expertos independientes evaluaran anualmente los sitios web de la Comisión, a fin de garantizar que estos sitios web cumplen las normas internacionales (18) . Además, se señaló que debía prestarse especial atención a los problemas causados por la visualización de archivos en formato PDF (19) .

Aunque los esfuerzos realizados por la Comisión para producir material en Braille, para personas ciegas y con visión parcial, parecían haber sido muy apreciados por el público, algunos de los que presentaron observaciones señalaron que la institución solo se refería al Braille como un formato alternativo. En su opinión, la Comisión debía ir más allá para garantizar que todos los documentos de la UE estén a disposición del público en general previa solicitud y sin demora indebida en una serie de formatos alternativos, como el Braille, la impresión grande, el audio y los formatos electrónicos (20) .

4. Las Escuelas Europeas : Este aspecto de la investigación atrajo una atención pública considerable, ya que la mayoría de los comentarios son muy críticos tanto de la Comisión como de las Escuelas Europeas. Las principales críticas se referían a lo que generalmente se percibía como el fracaso de las Escuelas para poner en práctica de manera efectiva su compromiso declarado hacia una integración real de los niños del SEN en la vida escolar (21) .

Frente a todas las promesas hechas por la Comisión para la integración de los niños del SEN, los comentarios recibidos por el público ofrecen una visión bastante diferente de la situación real, en la que la integración de los alumnos discapacitados en la educación general parece ser alcanzable solo a largo plazo. Sobre la base de estas observaciones públicas, parecía que i) las escuelas con frecuencia se han negado a aceptar a niños con ENE alegando que sus instalaciones carecen de los conocimientos técnicos ni de los recursos humanos para hacer frente a algunos tipos de discapacidad (22) ; II) el programa SEN de las Escuelas se ha vuelto cada vez más restrictivo, ya que no se ha hecho ningún esfuerzo real para promover una educación más inclusiva (23) ; III) Los niños del SEN a menudo no han sido realmente bienvenidos, y faltaban personal cualificado y apoyo para integrar a esos niños (24) ; y iv) un número significativo de alumnos, cuyas necesidades aún no pueden ser atendidas por las Escuelas Europeas, se vio obligado a encontrar escuelas alternativas (25) . Dado que la actual política de las Escuelas Europeas con respecto a los niños discapacitados se percibía como un fracaso, se propuso incluso que se desarrollara una nueva política en materia de discapacidad física y de aprendizaje para que las escuelas fueran inclusivas en lugar de elitistas (26) . En este contexto, también se sugirió la necesidad de una perspectiva educativa basada en la «integración preventiva» (27) .

Se expresaron una serie de observaciones críticas sobre aspectos específicos de la forma en que las Escuelas Europeas atienden a las necesidades de los niños del SEN. Estos incluyen:

- La convención sobre la cual se establecen programas individuales para los niños del SEN debe renovarse cada año. Como resultado, los padres no pueden estar seguros de cómo se desarrollará la situación con el tiempo (28) .



- Las escuelas no han podido idear programas adecuados para ciertas dificultades de aprendizaje, como la dislexia, para las que los profesores generalmente están mal preparados. Sería necesario impartir a los profesores una formación adecuada en el servicio sobre cómo apoyar a los alumnos disléxicos en sus clases (29) .
- Los padres de niños SEN no reciben suficiente información sobre el estado y el progreso eventual de sus hijos, y se mostraron preocupados por las propuestas hechas recientemente para restringir aún más su posible intervención en los grupos consultivos SEN de las Escuelas (30) .
- Las escuelas individuales aplican la política de las Escuelas hacia los niños SEN de una manera a menudo contradictoria. Por lo tanto, sería necesario considerar la creación de una posición de coordinador del SEN en cada una de las Escuelas (31) .

Algunas de las observaciones enviadas por el público también subrayaron las limitaciones financieras del programa SEN de las Escuelas resultantes de limitaciones presupuestarias. Se observó que, a pesar de la alegación de la Comisión de que no se había establecido ninguna restricción presupuestaria individual, la situación presupuestaria general limitaba de hecho la ayuda que debía prestarse a cada individuo (32) .

5. Coordinación interna : Según algunos de los que presentaron observaciones, el Código de Buenas Prácticas de la Comisión no respondía a las expectativas que había suscitado. Se observó con decepción que la Comisión no había hecho ningún esfuerzo por consultar a los representantes de las organizaciones con discapacidad en este proceso de examen. Se formularon varias observaciones críticas en relación con algunos aspectos del Código, como el alcance limitado de los conceptos fundamentales, incluida la discapacidad o la discriminación basada en la discapacidad (33) , o la falta de una definición clara de integración (34) . Además, se sugirió que las disposiciones del Código no deberían ser meros criterios o directrices, sino más bien normas vinculantes (35) .

En algunos comentarios del público se subrayó que debía ser necesaria la formación de todo el personal que trabaja junto a las personas con discapacidad.

INVESTIGACIONES COMPLEMENTARIAS

Tras examinar detenidamente el dictamen de la Comisión y las observaciones recibidas, el Defensor del Pueblo consideró que las preocupaciones expresadas por el público debían ponerse a disposición de la Comisión en el marco de un diálogo abierto y transparente. A tal fin, el Defensor del Pueblo envió a la Comisión una solicitud de información adicional sobre las siguientes cuestiones:

1. Empleo :

— Empleo y carga desproporcionada : En su carta a la Comisión, el Defensor del Pueblo acogió con satisfacción la inclusión del principio de no discriminación por motivos de discapacidad en el artículo 1 quinquies, apartado 1, del nuevo Estatuto, que entró en vigor el 1



de mayo de 2004. El Defensor del Pueblo señaló, sin embargo, que la interpretación de la Comisión de estas cláusulas en el contexto de un caso anterior (1391/2002/JMA) había dado lugar a un informe especial del Defensor del Pueblo al Parlamento de 27 de mayo de 2005. Dada la naturaleza de las observaciones de la Comisión en ese momento, el Defensor del Pueblo consideró pertinente revisar la interpretación de la Comisión de algunas de estas cláusulas en el contexto de su investigación de propia iniciativa. El Defensor del Pueblo señaló que, en su dictamen detallado en el asunto 1391/2002/JMA, la Comisión se refirió al artículo 1 quinquies, apartado 4, del Estatuto, relativo al alojamiento que debe proporcionarse a los funcionarios con discapacidad para que puedan desempeñar sus tareas asignadas. Esta disposición establece que la autoridad facultada para proceder a los nombramientos debe proporcionar «ajustes razonables», pero solo en la medida en que tales medidas no « *impongan una carga desproporcionada para el empleador* ». En sus observaciones, la Comisión parecía implicar que esta limitación del principio de no discriminación podría extenderse a otras situaciones en las que intervinieran personas con discapacidad.

Habida cuenta de lo anterior, el Defensor del Pueblo recordó que el artículo 1 quinquies, apartado 6, del Estatuto establecía explícitamente que toda limitación a la aplicación del principio de no discriminación debía justificarse por razones objetivas y razonables y dirigirse a objetivos legítimos basados en el interés general. Por consiguiente, el Defensor del Pueblo solicitó información sobre:

Los criterios o directrices que deberá definir la Comisión para ayudar a sus servicios a decidir si se considera que una medida de fomento de la integración de las personas con discapacidad impone una carga desproporcionada.

— Apoyo financiero a funcionarios y familiares con discapacidad : El Defensor del Pueblo señaló que algunos de los que habían presentado observaciones creían que el dictamen de la Comisión no se había referido a la línea presupuestaria A4301, por lo que solicitaba más información sobre:

La posición de la Comisión en el presupuesto de 2006.

— Accesibilidad de los procedimientos de contratación : Por lo que se refiere a la contratación de personas con discapacidad, el Defensor del Pueblo señaló que algunas de las observaciones recibidas habían considerado que la Comisión no parecía ser transparente en relación con los métodos de contratación proactivos que había anunciado. En consecuencia, el Defensor del Pueblo solicitó más información a la Comisión sobre:

Si sus servicios pretenden o no elaborar un nuevo informe sobre la accesibilidad de los procedimientos de contratación de candidatos con discapacidad distinta de la discapacidad visual.

— Informes periódicos sobre la política de contratación : Dado que, en opinión de algunos de los contribuyentes, la política de contratación de la Comisión debería permitir una evaluación más fiable de las medidas adoptadas para luchar contra la discriminación, el Defensor del



Pueblo solicitó a la Comisión más información sobre:

Si puede o no considerar la posibilidad de elaborar informes periódicos sobre el desarrollo de su política de contratación de personas con discapacidad y, en caso afirmativo, cuándo debía aplicarse esta medida.

— Medidas positivas para promover el reclutamiento : Teniendo en cuenta que, para algunos de los contribuyentes, una política de contratación más activa de las personas con discapacidad solo podría lograrse mediante una discriminación positiva, el Defensor del Pueblo solicitó más información a la Comisión sobre:

Si sus servicios pueden considerar la posibilidad de desarrollar medidas positivas para promover la contratación de personas discapacitadas.

2. Accesibilidad de los locales de la Comisión :

— Normas de construcción : Como algunos de los que hicieron comentarios mencionaron la necesidad de que la Comisión adopte planes globales de accesibilidad para las personas con discapacidad en todos sus locales, el Defensor del Pueblo solicitó más información a la Comisión sobre:

Si se ha adoptado o no la nueva versión anunciada del documento que contiene las normas aplicables a la accesibilidad de los locales de la Comisión para personas con discapacidad (2004) y, en caso afirmativo, cuál es el objetivo principal de sus disposiciones.

— Aparcamientos : El Defensor del Pueblo recordó algunas de las consideraciones formuladas en su Decisión de 31 de enero de 2005 sobre la reclamación 2415/2003/JMA, relativa a la supuesta falta de plazas de aparcamiento para personas con discapacidad cerca de los principales edificios de la Comisión en Bruselas. En ese caso, el Defensor del Pueblo consideró que el acceso a los locales de la Comisión para las personas con discapacidad que viajaban en coche debería ser un aspecto importante de su investigación de propia iniciativa. En la consecución de este objetivo, se comprometió a supervisar las acciones adoptadas por la institución a este respecto. En ese momento, el Defensor del Pueblo señaló que, a pesar de los compromisos de la Comisión de desarrollar y apoyar una estrategia global e integrada para hacer frente a las barreras sociales, arquitectónicas y de diseño que restringen innecesariamente el acceso de las personas con discapacidad (36) , todavía no se han anunciado medidas de seguimiento específicas. Además, señala que se están llevando a cabo negociaciones con las autoridades nacionales belgas para mejorar la situación. Por consiguiente, el Defensor del Pueblo solicitó más información a la Comisión sobre:

Si se ha logrado o no algún progreso en lo que respecta a la disponibilidad de plazas de aparcamiento reservadas a las personas con discapacidad, ya sea en todos sus edificios o cerca de ellos.

3. Información y comunicación :



— Accesibilidad de la información : Teniendo en cuenta algunas de las observaciones enviadas por el público, que subrayaban la necesidad de que la Comisión asuma un papel más proactivo en la difusión de información en toda Europa, el Defensor del Pueblo solicitó a la Comisión más información sobre:

Cómo pretende mejorar la accesibilidad de la información que produce para las personas con discapacidad, no solo para las personas con discapacidad visual, sino también para otros grupos de discapacidad.

— Accesibilidad de los Sitios Web : Por lo que se refiere a la accesibilidad a los contenidos de los sitios web de la Comisión ofrecidos a las personas con discapacidad, el Defensor del Pueblo solicitó más información a la Comisión sobre:

Si tiene previsto o no llevar a cabo una evaluación periódica de la accesibilidad de sus sitios web para las personas con discapacidad y, en caso afirmativo, cómo pretende aplicar esta iniciativa.

— Formatos accesibles alternativos para todos los documentos públicos de la UE : Dado que algunas de las personas que presentaron observaciones habían sugerido que los expertos independientes evaluaran anualmente los sitios web de la Comisión, el Defensor del Pueblo solicitó más información a la Comisión sobre:

Sus planes para que los documentos de la UE sean accesibles a través de formatos alternativos, como los formatos de gran tamaño, audio y electrónico.

4. Las Escuelas Europeas :

— Integración de los niños del SEN : El Defensor del Pueblo señaló que este aspecto de la investigación había atraído una considerable atención pública y que la mayoría de los comentarios habían sido muy críticos tanto con la Comisión como con las Escuelas Europeas. La crítica principal se dirigió a lo que se percibió como el fracaso de las Escuelas para poner en práctica de manera efectiva su compromiso declarado con la integración real de los niños SEN en la vida escolar.

El Defensor del Pueblo recordó que ya había tenido la oportunidad de examinar esta cuestión en el contexto de una reclamación anterior, 1391/2002/JMA, para la que presentó un informe especial al Parlamento el 27 de mayo de 2005. En ese caso, una de las alegaciones era que las Escuelas Europeas no habían establecido un sistema educativo integrado y unificado para atender las necesidades de todos los niños del SEN. Tras examinar los argumentos jurídicos pertinentes, el Defensor del Pueblo consideró que no parecía haber ninguna disposición jurídica vinculante que obligue a la Comisión a establecer un sistema educativo unificado. A falta de tal base jurídica, el Defensor del Pueblo no pudo concluir que la Comisión no hubiera actuado correctamente al no garantizar que las Escuelas Europeas proporcionaran programas educativos para todos los hijos del SEN de los funcionarios de la UE (37) .



Aunque el Defensor del Pueblo no encontró mala administración a este respecto, comentó la incoherencia entre la práctica de las Escuelas y los compromisos públicos, asumidos tanto por la UE en general como por la Comisión en particular, hacia una educación integrada. El Defensor del Pueblo señaló que la UE y sus Estados miembros habían destacado la integración de los niños en un sistema educativo unificado como uno de sus objetivos en la Resolución del Consejo de 31 de mayo de 1990 (38) . La propia Comisión adoptó una perspectiva idéntica en una Comunicación de 12 de mayo de 2000 («Hacia una Europa sin barreras para las personas con discapacidad») (39) , en la que se abordaba la integración de los niños ENE. En la presente Comunicación, la Comisión se comprometió a:

« (...) seguir apoyando los esfuerzos realizados por las Escuelas Europeas para prestar un apoyo adecuado a los alumnos con discapacidad con vistas a integrarlos en sus clases generales y, en particular, a ayudar mejor a los estudiantes con discapacidades de aprendizaje específicas. »
(40)

El Defensor del Pueblo señaló que, en su respuesta a la investigación de propia iniciativa del Defensor del Pueblo, la Comisión había reiterado su compromiso con la integración de todos los niños del SEN en un sistema educativo unificado, como se indicaba originalmente en el programa de las Escuelas Europeas para alumnos de SEN de 1999.

El Defensor del Pueblo también explicó que, en su reunión de los días 1 y 2 de febrero de 2005, el Consejo de Gobernadores de las Escuelas Europeas había aprobado un nuevo documento titulado «Integración de los alumnos del SEN en las Escuelas Europeas» (41) , que debería haber sentado las bases para una política revisada en este ámbito. Como se indica en el preámbulo de dicho documento, las nuevas directrices buscaban adaptar los procedimientos de admisión e integración de los alumnos con discapacidades de aprendizaje e introducir mejoras e innovaciones en el sistema para atender al creciente número de alumnos del SEN.

Habida cuenta de las iniciativas de la Comisión en este ámbito, el Defensor del Pueblo solicitó a la Comisión más información sobre:

Cómo se propone evaluar los resultados de la nueva política de las Escuelas Europeas para la integración de los niños del SEN y cuál es su calendario para hacerlo.

5. Coordinación interna :

— Análisis de la Encuesta de Discapacidad : A la luz de las observaciones de la Comisión sobre este aspecto del problema, el Defensor del Pueblo supuso que se había completado la primera revisión de la revisión de 2004 de su Código de Buenas Prácticas por parte de la Comisión. Por consiguiente, el Defensor del Pueblo solicitó a la Comisión más información sobre:

Si se ha analizado la encuesta y, en caso afirmativo, qué conclusiones extrajo de ella y qué medidas se propone adoptar sobre la base de dichas conclusiones.



— Sensibilización sobre la discapacidad : El Defensor del Pueblo señaló que el Código de Buenas Prácticas revisado incluía una sección sobre información y sensibilización en la que se preveía que el Código debía señalarse a la atención de todo el personal. En la misma sección también se disponía que se organizaran cursos de capacitación sobre la cuestión de la discapacidad para los más interesados en esta esfera. Sin embargo, la Comisión no dio ningún calendario ni ninguna indicación más precisa sobre cómo hacerlo en el futuro (42) . El Defensor del Pueblo solicitó más información a la Comisión sobre:

Si ha establecido o no, o tiene la intención de establecer cursos o campañas de información sobre la conciencia de la discapacidad para su personal.

Segundo dictamen de la Comisión

En su segundo dictamen en respuesta a las preguntas del Defensor del Pueblo, la Comisión declaró que había adoptado un enfoque amplio, progresivo y proactivo de sus políticas en relación con las personas con discapacidad. El nuevo Estatuto de los funcionarios, el Código de Buenas Prácticas revisado y los diversos servicios prestados han tenido en cuenta las necesidades especiales que pueden tener las personas con discapacidad en sus relaciones con la Comisión. Sostuvo que su política tenía por objeto garantizar que el principio de no discriminación se aplicara a todas sus relaciones con las personas con discapacidad. La Comisión se comprometió a seguir consultando con sus servicios y con los representantes del personal con discapacidad, en particular a través del Grupo Interservicios sobre Discapacidad.

Por lo que respecta a cada una de las preguntas formuladas por el Defensor del Pueblo, la respuesta de la Comisión fue, en resumen, la siguiente:

1. Empleo :

— Empleo y carga desproporcionada : La Comisión explicó que, el 20 de junio de 2004, para aplicar el artículo 1 quinquies, apartado 4, del Estatuto, había adoptado la Comunicación administrativa n.º 69-2004 (43) . La presente Comunicación tenía por objeto ayudar a sus servicios a decidir , *entre otras cosas* , si se consideraba o no que una medida para promover la integración de las personas con discapacidad imponía una carga desproporcionada. Las normas de desarrollo se refieren, *entre otras cosas* , a la contratación de personas con discapacidad, la discapacidad en el transcurso de la carrera del funcionario, los ajustes razonables y la carga indebida.

La Comisión explicó que, además, el punto 3 de su Código de Buenas Prácticas (acomodación laboral) establece que deben aplicarse normas estrictas a la hora de evaluar qué es una carga desproporcionada para las instituciones europeas. Alegó que, para llegar a la conclusión de que la prestación de alojamiento a una determinada persona discapacitada impone una carga indebida a la institución, los costes de su prestación deben ser superiores a los que pueda suponer razonablemente la institución.



La Comisión se refirió a una serie de ejemplos de adaptaciones razonables que se mencionan en el punto 8 de las normas de desarrollo, como por ejemplo: i) hacer que las instalaciones que ya están en uso por los empleados sean fácilmente accesibles y utilizables para las personas con discapacidad; II) reestructuración del empleo; III) prestación de asistencia; IV) horarios de trabajo a tiempo parcial o modificados; V) adquisición o modificación de productos; vi) ajuste de los materiales de capacitación; y vii) alterar las políticas o prácticas. Además, la Comisión también hizo referencia a varias consideraciones al evaluar lo que constituye una carga indebida, tal como se establece en el punto 13 de las normas de desarrollo. Estas consideraciones incluían i) el tipo y el coste del alojamiento; II) los gastos de alojamiento, en relación con los gastos generales medios de cada miembro del personal; III) el coste del alojamiento, en relación con el presupuesto disponible; IV) el número de personas en la zona concreta que necesitan alojamiento; y v) las necesidades de salud y seguridad de todo el personal.

— Apoyo financiero a funcionarios y familiares con discapacidad : Como había alegado en el contexto de la investigación del Defensor del Pueblo en la reclamación 1391/2002, la Comisión subrayó que no discriminaba en relación con el apoyo que presta a los funcionarios y familiares con discapacidad. La Comisión alegó que toda la gama de ayudas financieras resultantes del seguro de enfermedad para los gastos médicos, de los subsidios legales y de la ayuda complementaria para discapacitados por gastos no médicos era adecuada para compensar los costes suplementarios vinculados a una discapacidad. Las directrices para la ejecución del presupuesto relativas a los créditos de asistencia social para las personas con discapacidad entraron en vigor el 1 de mayo de 2004, y establecen que la contribución personal del beneficiario puede oscilar entre el 5 % y el 35 %, calculada sobre la base de sus ingresos familiares imponibles. Las directrices son interinstitucionales y cada institución determina sus propios recursos presupuestarios a este respecto.

En cuanto a la situación presupuestaria, la Comisión observó que, en 2005, se habían gastado todos los fondos de la rúbrica presupuestaria «ayuda complementaria a los discapacitados» (1 350 000 EUR) en relación con 85 casos. Alrededor de la mitad de los expedientes se referían a costes relacionados con desventajas graves, mientras que los demás casos consistían en el reembolso de los costes de educación o de formación específica necesarios para compensar los efectos de una discapacidad. En cuanto al presupuesto de 2006, la Autoridad Presupuestaria había concedido un importe de 1 770 000 EUR (un aumento del 30 % en comparación con 2005). Sin embargo, la Comisión lamentó que este importe no fuera suficiente para garantizar un reembolso íntegro en todos los casos.

Aunque la Comisión alegó que no tenía la obligación legal de reembolsar todos los costes derivados de una discapacidad, se comprometió a proporcionar un reembolso íntegro de estos costes a condición de que la Autoridad Presupuestaria garantizara la disponibilidad de fondos suficientes y de que pudiera alcanzarse un acuerdo interinstitucional sobre una propuesta revisada de las directrices antes mencionadas.

La Comisión no consideró que la contribución personal prevista en las Directrices (del 5 % al 35 %) fuera socialmente injusta, ya que se basaba en la renta familiar imponible. Observó que,



desde el 1.º de mayo de 2004, la ayuda financiera individual se había ampliado, a raíz de los cambios en la política sobre el subsidio complementario para las personas con discapacidad y un aumento de la cantidad de fondos disponibles. Entre 2003 y 2005, el número de expedientes aumentó casi un 50 % (de casi 60 a 85 expedientes) y los fondos disponibles aumentaron un 130 % (de 770 000 EUR a 1 770 000 EUR). En 2004 también se estableció un nuevo sector de «ayuda práctica para discapacitados» para proporcionar información general, asesoramiento y apoyo.

La Comisión también anunció su intención de publicar en 2006 una nueva Comunicación relativa a la asistencia a las personas con discapacidad (44) .

— Accesibilidad de los procedimientos de contratación : La Comisión alegó que se habían aplicado varias medidas prácticas para facilitar la participación en concursos de candidatos con discapacidad. Así pues, todas las convocatorias de oposición incluían un párrafo estándar en el que se recordaba a los candidatos el carácter no discriminatorio de la política de contratación de la Unión (45) , y se invitaba a los candidatos con discapacidad a presentar un certificado para que los tribunales de selección pudieran adoptar las medidas necesarias para facilitar su participación (46) . En el anexo 2 de la «Guía para los solicitantes», publicada al mismo tiempo que cada convocatoria de oposición, se recuerda a los candidatos con discapacidad la oportunidad de solicitar arreglos especiales debido a su discapacidad.

En el sitio web de la EPSO se hace referencia directa a la igualdad de oportunidades. Lo mismo se aplica a todos los anuncios que aparecen en la prensa cuando se anuncia un concurso.

La Comisión consideró que ya se habían adoptado numerosas medidas prácticas y enumeró una serie de ejemplos en casos de discapacidad que entrañaban problemas con: vista (47) , audición (candidatos sordos o parcialmente sordos) (48), las manos (49), el uso de una silla de ruedas (50) , enfermedad debilitante/habilidad cerebral (51) o dislexia (52) . Para dar cumplimiento a estas solicitudes, la EPSO tiene la opción de invitar a los candidatos con discapacidad a centros de pruebas separados.

— Informes periódicos sobre la política de contratación : La Comisión observó que había revisado, conjuntamente con la EPSO, el contenido de la publicidad para la contratación con el fin de fomentar más solicitudes de personas con discapacidad. En este contexto, debe examinarse la cuestión de la elaboración de informes sobre discapacidades específicas.

La Comisión subrayó que el anonimato es una garantía de igualdad de trato para los candidatos y que sus procedimientos de selección se organizan, en la mayor medida posible, para garantizar la igualdad de trato. A este respecto, la EPSO dispone de instalaciones especiales para que las personas con discapacidad puedan competir en los concursos.

La Comisión se comprometió a examinar la forma en que las estadísticas existentes y futuras sobre el empleo de las personas con discapacidad podrían hacerse más fiables y actualizadas periódicamente, respetando al mismo tiempo las obligaciones del [Reglamento \(CE\) n.º 45/2001](#)



del [Enlace] Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2000, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones y los organismos comunitarios y a la libre circulación de estos datos (53) . La Comisión acordó considerar la posibilidad de publicar estas estadísticas en el futuro, como parte del examen para mejorar la fiabilidad de las estadísticas.

— Medidas positivas para promover la contratación de personas con discapacidad : En opinión de la Comisión, la mejor garantía de igualdad de trato en el proceso de contratación implica el desarrollo de pruebas anónimas y la realización de ajustes razonables para participar en estas pruebas. Sin embargo, la Comisión no consideró necesario intervenir más al prever, en esta fase de los procedimientos de contratación, medidas de acción positiva específicamente para las personas con discapacidad.

La Comisión explicó que sus servicios, a saber, la Dirección General de Personal y Administración («DG ADMIN») se notifican cuando los ganadores de los concursos de contratación indican que tienen una discapacidad que requiere un acomodo especial en el proceso de contratación. En tales casos, estos servicios adoptan un enfoque proactivo para su contratación caso por caso.

La Comisión se comprometió a explorar los diversos medios para promover la contratación de personas con discapacidad dentro de la institución, y se refirió a la necesidad de llevar a cabo una revisión de la situación actual. Esta revisión debería considerar la cuestión de desarrollar con mayor detalle medidas positivas para promover la contratación de personas con discapacidad, como i) establecer y supervisar algún tipo de objetivo de empleo para las personas con discapacidad, y ii) el seguimiento individual por parte de la administración después del examen médico para garantizar las asignaciones y el equipo adecuados. La Comisión añadió además que la cuestión de la discapacidad se había abordado en cursos sobre entrevistas de selección y capacitación de los miembros del tribunal de selección, a fin de garantizar la sensibilización sobre las cuestiones.

2. Accesibilidad de los locales de la Comisión :

— Normas de construcción en relación con la accesibilidad : La Comisión explicó que la última versión de su manual de normas de edificios, *Manuel d'Immeuble Type* («MIT»), había sido adoptada por el Comité de Gestión de la OIB el 29 de junio de 2004. En el capítulo B.III del manual se abordan los requisitos para las personas con discapacidad, que abarcan las cuestiones generales de acceso, las plazas de aparcamiento reservadas, la movilidad, la iluminación y la señalización en los edificios, las instalaciones sanitarias y la evacuación de emergencia. El MIT era conforme con la legislación belga y europea en este ámbito, y tuvo en cuenta las disposiciones del Código de Buenas Prácticas de la Comisión.

La Comisión explicó que no estaba prevista una nueva revisión del MIT. El documento actual no se adoptó hasta mediados de 2004 y está actualizado en términos de normas de accesibilidad. El asunto debe mantenerse bajo revisión a la luz de las nuevas normas del MIT y de la experiencia adquirida por el especialista recientemente nombrado responsable de las



evaluaciones ergonómicas del entorno de la oficina.

— Aparcamientos : La Comisión observó que, de conformidad con su Código de Buenas Prácticas, se reservan un mínimo de dos plazas de aparcamiento para los visitantes con discapacidad dentro o fuera de cada edificio de la Comisión, excepto para el edificio Berlaymont. En total, la Comisión dispone de 114 de estos espacios reservados. Dado que el acceso al edificio Berlaymont está restringido por razones de seguridad, la Comisión solicitó a las autoridades de Bruselas que reservaran plazas de aparcamiento para discapacitados en el Boulevard Charlemagne, que se extiende junto a la calle Berlaymont. La Comisión explicó que, en octubre de 2005, el Comisionado de Policía de Bruselas-Capital había acordado reservar tres plazas de este tipo en el Boulevard Charlemagne y había solicitado además al Departamento de Obras Públicas que llevara a cabo las tareas necesarias. La Comisión también tiene 216 plazas de aparcamiento reservadas dentro de sus edificios para su propio personal que sufre discapacidades permanentes o temporales/dificultades relacionadas con la salud (54) .

3. Información y comunicación :

— Accesibilidad de la información difundida para las personas con discapacidad : La Comisión se refirió a su posición sobre la accesibilidad de la información establecida en la página «EUROPA — Web Accessibility Policy» (55) . De acuerdo con esta posición, la Comisión decidió adoptar la conformidad de nivel A (Prioridad 1) para los sitios web nuevos y actualizados alojados en el servidor EUROPA, con el fin de facilitar su uso no solo por las personas con discapacidad visual, sino también por las personas con otras discapacidades y discapacidades, haciéndolos por lo tanto conformes con las normas WAI («Iniciativa de Accesibilidad Web»).

— Accesibilidad de los sitios web al público : La Guía para proveedores de información («IPG») está destinada a los autores de páginas del sitio web de EUROPA (coordinadores, webmasters, contratistas) y cubre aspectos editoriales, técnicos y gráficos. Las normas establecidas en el GIG (56) deben seguirse para garantizar un servicio coherente y fácil de usar. Según el IPG, las páginas que se publicarán en EUROPA deben cumplir los criterios de accesibilidad del nivel A. Los webmasters de las direcciones generales y los servicios son responsables de la evaluación de la accesibilidad de sus respectivos sitios web y de garantizar que los sitios web y las páginas web cumplan con las normas IPG y WAI-A. Además, el equipo de coordinación de EUROPA de la Dirección General de Prensa y Comunicaciones presta asistencia sistemática a los webmasters en su tarea de validación de los sitios web y páginas web.

— Formatos accesibles alternativos para todos los documentos públicos de la UE : Las páginas EUROPA compatibles con Wai pueden, con el software de usuario final adecuado, ser utilizadas para crear impresiones grandes, Braille, audio y formatos electrónicos. Debido a la naturaleza multilingüe de EUROPA, no todos los idiomas pueden ser leídos por software de asistencia. La Comisión mejorará las páginas existentes conformes a WAI proporcionando archivos de audio o archivos de lenguaje de signos generados a partir de estas páginas. Esta solución, sin embargo, podría causar problemas, ya que la técnica en cuestión todavía se está



desarrollando. Alternativamente, se podría proporcionar un enlace a una salida de audio junto a los textos introductorios de cualquier artículo/información largo, para que las personas con discapacidad entiendan rápidamente si la información es de interés para ellos. De lo contrario, la Comisión considera que el carácter multilingüe del sitio web de EUROPA se presta mejor garantizando que sus contenidos sean fácilmente accesibles y conformes con las WAI. La Comisión ha subrayado que ha adoptado un sistema de gestión de contenidos web que debe garantizar la conformidad con los requisitos mínimos de accesibilidad en todas sus páginas (57)

4. Escuelas Europeas :

— Integración de los niños SEN : La Comisión señaló que no tiene competencia en materia educativa y, por lo tanto, no puede evaluar o evaluar el nuevo programa SEN en las Escuelas Europeas ni dar instrucciones a estas últimas. Explicó que la Junta de Gobernadores de las Escuelas toma todas las decisiones en este ámbito, y que la Comisión solo tiene un voto en la Junta (58) . Sin embargo, como miembro de la Junta y como empleador responsable, cuyo personal expresa su insatisfacción con este servicio de las Escuelas que se financian en gran medida con recursos comunitarios, la Comisión señaló que estaba trabajando activamente en el asunto solicitando que se realizara una evaluación del programa SEN.

En marzo de 2004, el Comité Pedagógico de las Escuelas, que es el subcomité preparatorio de la Junta de Gobernadores, en el que se examinan y preparan cuestiones educativas para su examen y aprobación, tuvo la primera oportunidad de examinar ciertas estadísticas sobre casos de ENE. En ese momento, la Comisión solicitó que el programa SEN fuera evaluado por los inspectores/coordinadores pertinentes y que el próximo informe anual sobre el programa SEN proporcionara los resultados de dicha evaluación. Sin embargo, el informe más reciente sobre el programa SEN fue similar al primero, y la Comisión, en la reunión del Comité Pedagógico de noviembre de 2005, reiteró su solicitud. La Comisión también pidió a la Oficina del Secretario General de las Escuelas más información sobre la aplicación del programa SEN, derivada de otras solicitudes de información del Defensor del Pueblo. El Secretario General ha declarado por escrito el tipo de información que debe recopilarse. La Comisión lamenta que, a partir de la fecha de su segundo dictamen, marzo de 2006, no se hayan facilitado datos.

La Comisión señaló que, a finales de enero de 2006, había solicitado formalmente una evaluación de la aplicación del programa SEN por parte del Consejo de Gobernadores de las Escuelas. La Comisión anunció que debería publicarse un informe de evaluación durante el próximo año escolar (59) .

5. Coordinación interna :

— Análisis de una encuesta sobre discapacidad : La Comisión subrayó que se había analizado la encuesta sobre discapacidad realizada por sus servicios en diciembre de 2004 y que los resultados se habían publicado en su intranet. Sobre la base del análisis de las respuestas recibidas, se han propuesto una serie de acciones específicas.



La Comisión observó que algunos puntos se formulaban con regularidad y que se beneficiarían de nuevas medidas. Mencionó las dificultades experimentadas por algunos funcionarios para conseguir tipos de alojamiento relativamente sencillos para facilitar su trabajo, como sillas o mesas de oficina adecuadas o equipos informáticos adaptados, así como las dificultades con que tropiezan algunas personas con discapacidad para acceder a determinados edificios o moverse dentro de ellos.

La Comisión explicó que, sobre la base de la encuesta, el personal consideraba que, debido a su discapacidad, habían experimentado un trato menos favorable, lo que había dado lugar a un desarrollo profesional más lento, a un trabajo menos interesante o a la falta de acceso a la formación. A nivel interpersonal, varios miembros del personal experimentaron comportamientos de superiores y colegas que consideraban humillantes, intimidantes u ofensivos. La Comisión anunció que las conclusiones del informe resumido se habían señalado a la atención de todos los servicios interesados, en los que se podría realizar un seguimiento útil para garantizar un mayor conocimiento de las cuestiones.

En opinión de la Comisión, debe informarse a todo el personal de que la discriminación por motivos de discapacidad está expresamente prohibida por el Estatuto. En consecuencia, la encuesta y sus resultados se han colocado en su sitio web de la intranet con el fin de sensibilizar al personal sobre las cuestiones y ayudar a lograr cambios. También debe recordarse al personal en el sitio web de la intranet que, de conformidad con su Código de Buenas Prácticas, la Unidad de Igualdad de Oportunidades y No Discriminación de la DG ADMIN puede dirigirse con carácter confidencial si los miembros del personal no están satisfechos con la aplicación del Código. La Dependencia procederá a tratar esas cuestiones discretamente, teniendo debidamente en cuenta el nivel de confidencialidad buscado.

Como parte del proceso de establecimiento de una política más visible y activa en este ámbito, la DG ADMIN debe consultar a los Estados miembros sobre los procedimientos, en su caso, adoptados en sus administraciones nacionales para promover la contratación y el alojamiento de las personas con discapacidad, con vistas a establecer las mejores prácticas existentes que también podrían aplicarse en el seno de la Comisión.

A fin de evaluar los progresos realizados, a finales de 2006 se estudiará la posibilidad de realizar una segunda encuesta sobre discapacidad en 2007-2008. Dependiendo de sus resultados, las prioridades pueden reorientarse según sea necesario y se pueden establecer nuevas prioridades.

— Sensibilización sobre la discapacidad : La Comisión declaró que el principal medio de sensibilización y sensibilización del personal sobre las discapacidades había sido la publicidad obtenida con la aprobación del Código de Buenas Prácticas revisado y la realización de la encuesta de todo el personal de la Comisión sobre cuestiones de discapacidad. El siguiente paso debería ser la publicación de los resultados de la encuesta en la intranet de la Comisión a principios de 2006. Esta acción debe proporcionar información sobre el análisis de las respuestas, junto con las acciones de seguimiento.



La Comisión anunció su intención de organizar acciones específicas de sensibilización a través de sesiones de formación o mediante la organización de una conferencia o seminario para el personal, en 2006 o 2007, coincidiendo con el Día Europeo anual de las Personas con Discapacidad el 3 de diciembre. Tales acciones deben depender de la disponibilidad de recursos financieros (60) .

Participación del público

El Defensor del Pueblo publicó el segundo dictamen de la Comisión en su sitio web. No recibió más comentarios del público al respecto.

Información adicional de la Comisión

Con el fin de actualizar parte de la información facilitada en su segundo dictamen, en particular por lo que se refiere a tres de los compromisos contraídos en él, la Comisión envió información adicional al Defensor del Pueblo. Las cuestiones planteadas por la Comisión se referían a los siguientes aspectos:

1. Empleo :

— Apoyo financiero a funcionarios y familiares con discapacidad : La Comisión anunció que tenía previsto abordar este problema en el marco de una Comunicación más exhaustiva sobre «Igualdad de oportunidades para todos» que se presentará en el contexto más amplio de la designación de 2007 como Año Europeo de la Igualdad de Oportunidades para Todos.

4. Escuelas Europeas :

— Integración de los niños SEN : La Comisión explicó que, en su reunión de 30 de enero de 2006, el Consejo de Gobernadores de las Escuelas Europeas no tuvo la oportunidad de examinar el informe sobre las estadísticas SEN 2004/2005, a pesar de que este punto estaba previsto en el orden del día. En su reunión de abril de 2006, aunque esta cuestión no figuraba en el orden del día, la Comisión solicitó que en el próximo informe se incluyera i) información más cualitativa sobre la integración de los alumnos del SEN y su progreso, ii) una evaluación del programa SEN, y iii) la estrategia que se adoptaría en las Escuelas Europeas para atender a estos niños. La Junta de Gobernadores tomó nota del informe, que está siendo examinado por la Junta de Inspectores. La Comisión observó que no se había comunicado ningún nuevo informe, aunque el próximo informe 2005/2006 debería incluir las adiciones solicitadas de información cualitativa y una evaluación del programa.

5. Coordinación interna :

— Sensibilización sobre la discapacidad : En su primer dictamen, la Comisión se había comprometido a publicar los resultados de la encuesta a escala de la Comisión sobre cuestiones de discapacidad en su sitio web de la intranet, como medio para proporcionar información sobre el análisis de las respuestas, junto con las acciones de seguimiento previstas



para 2006. La Comisión anunció que los resultados de la encuesta ya se habían publicado (61) . Añadió que los datos deberían completarse con la información recopilada a través de la encuesta sobre las políticas de los Estados miembros para el empleo de las personas con discapacidad en su función pública. La evaluación debe determinar un punto de referencia de las prácticas y contribuir también a la definición de un plan de acción sobre discapacidad para 2007.

La Comisión ha anunciado que también se ha publicado una Guía práctica sobre buenas prácticas en el ámbito de la no discriminación dirigida a formadores y directivos que tienen responsabilidades en materia de contratación (62) . La Comisión explicó que esta guía se ha difundido lo más ampliamente posible en todos sus servicios. Aunque la Comisión no ha organizado cursos específicos sobre cuestiones de no discriminación, el tema se ha abordado a través de cursos sobre entrevistas de selección y formación para los tribunales de selección. Además, la Comisión se comprometió a organizar, en un futuro próximo, actos adicionales de sensibilización dirigidos al personal especialmente interesado (63) .

LA DECISIÓN

1 Observaciones introductorias

1.1 Según el artículo 195 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, el Defensor del Pueblo Europeo está facultado para realizar investigaciones por iniciativa propia en relación con posibles casos de mala administración en las actividades de las instituciones y órganos comunitarios.

El Defensor del Pueblo decidió abrir una investigación de propia iniciativa sobre el tema de la integración de las personas con discapacidad por parte de la Comisión Europea, a fin de garantizar que estos ciudadanos no fueran discriminados en sus relaciones con la institución.

1.2 Al poner en marcha esta iniciativa, el Defensor del Pueblo tuvo en cuenta el hecho de que, como se acordó en general, una discapacidad no puede definirse simplemente sobre la base de un único problema de salud, o una limitación física o mental, sino más bien como resultado de una interacción compleja entre un problema de salud o una limitación funcional y el entorno social, político, cultural, económico y físico (64) . El Defensor del Pueblo también es consciente de que las personas con discapacidad constituyen una proporción significativa de la población de la Unión Europea (65) . Como han reconocido públicamente la mayoría de las instituciones europeas y los Estados miembros (66) , este segmento de la sociedad se enfrenta a una amplia gama de obstáculos que impiden a sus miembros alcanzar la igualdad de oportunidades, la independencia y la plena integración económica y social. El Defensor del Pueblo observa que, como reveló una encuesta del Eurobarómetro, prácticamente todos los europeos parecen estar a favor de una mejor integración de las personas con discapacidad y no menos del 97 % de los europeos piensan que debería hacerse algo para implicar más a las personas con discapacidad en la sociedad (67) .



A pesar de que la Unión Europea ha respondido a este desafío adoptando una serie de iniciativas jurídicas y políticas para corregir esos obstáculos, el Defensor del Pueblo consideró importante evaluar si estos compromisos se habían puesto realmente en práctica.

El Defensor del Pueblo señaló que el reconocimiento del problema y la necesidad de abordarlo como un derecho humano fundamental llevó a la inclusión en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea de una referencia a las personas con discapacidad. El artículo 26 de la Carta dispone lo siguiente:

« La Unión reconoce y respeta el derecho de las personas con discapacidad a beneficiarse de medidas destinadas a garantizar su independencia, su integración social y profesional y su participación en la vida de la comunidad. »

Al abrir esta iniciativa, el Defensor del Pueblo también reconoció que la Unión había adoptado una amplia gama de medidas jurídicas para luchar contra la discriminación contra las personas con discapacidad, en particular el «Código de buenas prácticas para el empleo de las personas con discapacidad» de 1998 («el Código de Buenas Prácticas»). Este Código proporcionaba una posición interinstitucional común destinada a luchar contra los problemas potenciales a los que se enfrentaban las personas con discapacidad para convertirse en funcionarios de la UE o para desarrollar sus carreras como tales (68) , sobre cuya base había que emprender una serie de acciones en ámbitos como la contratación, la carrera profesional, el entorno laboral, la información y la sensibilización y el seguimiento.

1.3 El Defensor del Pueblo consideró que, entre las diversas instituciones que tienen la responsabilidad especial de garantizar que las personas con discapacidad no sean discriminadas en sus relaciones con la institución de la UE, la Comisión merece especial atención debido a su papel central en el marco institucional de la Unión Europea. Además, la Comisión adoptó un enfoque exhaustivo respecto de las personas con discapacidad en su Comunicación de 10 de mayo de 2000 titulada «Hacia una Europa sin barreras para las personas con discapacidad» («la Comunicación»). En esta Comunicación, la Comisión se comprometió a desarrollar y apoyar una estrategia global e integrada para hacer frente a las barreras sociales, arquitectónicas y de diseño que restringen innecesariamente el acceso de las personas con discapacidad (69) . No solo reiteró los compromisos establecidos en el Código de Buenas Prácticas, sino que, además, definió nuevas medidas destinadas a fomentar el desarrollo de buenas prácticas dentro de su propia organización. Las acciones esbozadas en la Comunicación se agruparon en cinco temas: I) el empleo; II) accesibilidad de los locales de la Comisión; III) información y comunicación; IV) las Escuelas Europeas; y v) coordinación interna. Esta estrategia fue reforzada por la Comisión con la adopción formal de un Código de Buenas Prácticas revisado el 25 de noviembre de 2003.

El Defensor del Pueblo observa que estas acciones fueron apoyadas por el Parlamento Europeo (70) , que pidió la aplicación de acciones complementarias (71) , como la creación de un grupo interinstitucional para examinar las condiciones de acceso de las personas con discapacidad a las instituciones de la UE.



1.4 Sin embargo, la buena administración requiere una acción rápida y eficaz para cumplir los compromisos declarados públicamente. El Defensor del Pueblo consideró que la gravedad de la situación de las personas con discapacidad exigía que los compromisos proclamados se pusieran en práctica mediante acciones eficaces. Debido al papel central de la Comisión en el marco institucional de la Unión y a sus compromisos específicos con respecto a las personas con discapacidad, el Defensor del Pueblo consideró útil revisar las acciones emprendidas por esta institución en este ámbito y evaluar si eran o no coherentes con las obligaciones jurídicas de la institución y los compromisos declarados.

Por consiguiente, el Defensor del Pueblo pidió a la Comisión que informara sobre i) las medidas que había adoptado o se proponía adoptar para garantizar que las personas con discapacidad no fueran discriminadas en sus relaciones con la institución y ii) el calendario para su adopción.

El Defensor del Pueblo dejó claro que, a la luz del resultado de la investigación, estudiaría si era necesario ampliar el alcance de la investigación e incluir a otras instituciones de la UE.

1.5 En primer lugar, el Defensor del Pueblo desea dejar claro que su investigación no abordó casos concretos de posible mala administración en relación con la Comisión. En cambio, el Defensor del Pueblo ha centrado su investigación en i) la revisión de los compromisos asumidos por la institución con respecto a las personas con discapacidad, y ii) la comparación de estos compromisos con lo que se ha logrado efectivamente.

Este proceso se llevó a cabo mediante un diálogo abierto y transparente en el que el Defensor del Pueblo invitó a las personas con discapacidad, a los grupos representativos, a otros defensores del pueblo a nivel nacional y regional y a los ciudadanos a contribuir. Como anunció en su carta de 19 de noviembre de 2003 por la que se abre la investigación, el Defensor del Pueblo publicó en su sitio web todos los documentos pertinentes relativos a la investigación, incluidas todas las observaciones del público que no tenían carácter confidencial. El Defensor del Pueblo también transmitió estas observaciones del público a la Comisión y le pidió que formulara observaciones al respecto.

El Defensor del Pueblo desea dar las gracias a todos los que participaron en su investigación. Su contribución sustantiva ciertamente ha arrojado alguna luz sobre los problemas existentes y ha ayudado a la Comisión a identificar las acciones que podrían ayudar a mejorar la situación en el futuro. El alto nivel de participación del público subraya la importancia que los ciudadanos parecen conceder a los problemas que afectan a las personas con discapacidad.

1.6 Con el fin de presentar las conclusiones de la investigación de manera exhaustiva y comprensible, el Defensor del Pueblo, siguiendo la práctica de la Comisión en sus dictámenes, las agrupará en torno a los cinco ámbitos establecidos en la Comunicación, como hizo la Comisión en sus dictámenes, a saber: i) el empleo; II) accesibilidad de los locales de la Comisión; III) información y comunicación; IV) las Escuelas Europeas; y v) coordinación interna.

2 Acciones de la Comisión en el ámbito del empleo



2.1 El Defensor del Pueblo reconoce que se han logrado muchos progresos en este ámbito, no solo en la definición de principios claros contra la discriminación en el empleo de las personas con discapacidad, sino también en aspectos como el apoyo financiero de los funcionarios y familiares con discapacidad, así como las cuestiones de contratación.

Principios generales

2.2 El Defensor del Pueblo observa que el Código de Buenas Prácticas de la Comisión presentó una serie de principios generales destinados a facilitar el acceso de las personas con discapacidad al trabajo en la administración pública europea. Sobre la base de estos principios generales, debían adoptarse todas las medidas razonables para garantizar que las personas con discapacidad pudieran participar en concursos en igualdad de condiciones con otros candidatos.

2.3 El Defensor del Pueblo observa además que estos principios se han reforzado sustancialmente con la entrada en vigor, el 1 de mayo de 2004, de las modificaciones del Estatuto, que incorporaban las disposiciones contra la discriminación consagradas en el artículo 13 del Tratado CE (72) . Por consiguiente, el artículo 1 quinquies, apartado 1, del Estatuto prohíbe expresamente cualquier discriminación por motivos de discapacidad:

« En la aplicación del presente Estatuto, queda prohibida toda discriminación por razón de sexo, raza, color, origen étnico o social, características genéticas, idioma, religión o convicciones, opiniones políticas o de cualquier otro tipo, pertenencia a una minoría nacional, patrimonio, nacimiento, discapacidad, edad u orientación sexual. »

Este principio se ha desarrollado aún más en el artículo 1 quinquies, apartado 4, que establece que:

« A los efectos del apartado 1, una persona tiene una discapacidad si tiene una discapacidad física o mental que es, o es probable que sea, permanente. (...)

Una persona con discapacidad cumple las condiciones [para] desempeñar las funciones esenciales del trabajo cuando se realizan ajustes razonables.

Por «ajuste razonable» se entenderá, en relación con las funciones esenciales del puesto de trabajo, las medidas adecuadas, cuando sea necesario, para permitir a una persona con discapacidad acceder a un empleo, participar en él o avanzar en él, o seguir una formación, a menos que dichas medidas supongan una carga desproporcionada para el empresario. »

El Defensor del Pueblo señala que, aunque el Estatuto no define el concepto de «ajuste razonable», su artículo 1 quinquies, apartado 6, establece una serie de criterios en función de los cuales

« toda limitación [del principio de no discriminación] debe justificarse por razones objetivas y razonables y debe estar dirigida a objetivos legítimos de interés general en el marco de la



política de personal.

2.4 Al examinar la aplicación de la disposición anterior a casos individuales, el Defensor del Pueblo es consciente de que una interpretación indebidamente amplia del concepto de «carga desproporcionada» podría anular el principio de no discriminación por motivos de discapacidad. En opinión del Defensor del Pueblo, esa era la posición adoptada por la Comisión en el contexto de un caso anterior (1391/2002/JMA) relativo a la educación de los hijos de los funcionarios de la UE con necesidades educativas especiales («Niños ENE»).

El Defensor del Pueblo toma nota de que, en respuesta a su pregunta, la Comisión se ha comprometido a respetar los principios y criterios establecidos en su Comunicación administrativa n.º 69-2004 (73) de 20 de junio de 2004. De conformidad con el principio enunciado en el artículo 12 de la citada Comunicación, la única situación en la que no se espera que la Comisión proporcione a una persona con discapacidad ajustes razonables para desempeñar una función como funcionario de la Comisión es si los costes de la operación irían más allá de lo que cabe esperar razonablemente de la institución.

El Defensor del Pueblo confía en que la Comisión reflexionará sobre la razonabilidad de cada situación de manera justa y equilibrada, teniendo en cuenta las directrices establecidas en los artículos 8 y 13 de su Comunicación, que incluyen una serie de criterios como el reacondicionamiento de las instalaciones existentes, la introducción de horarios de trabajo modificados, la adquisición o modificación de dispositivos y consideraciones basadas en las necesidades de salud y seguridad de todo el personal.

Habida cuenta de la situación, el Defensor del Pueblo ha llegado a la conclusión de que, en la actualidad, no parece necesario adoptar más medidas en relación con este aspecto del asunto.

Apoyo financiero

2.5 El Defensor del Pueblo observa que el apoyo financiero prestado a los funcionarios con discapacidad o con familiares discapacitados es un tema que ha llamado la atención pública, en particular en lo que respecta a la llamada «ayuda complementaria a los discapacitados». Esta ayuda constituye una contribución adicional de cada institución mediante la línea presupuestaria A4103 a los costes derivados de una discapacidad. El Defensor del Pueblo también observa que se ha afirmado que este tipo de apoyo debe concederse como una cuestión de derecho a los funcionarios con discapacidad o con miembros de la familia discapacitados y que debe cubrir todos los gastos incurridos.

Parece que, sobre la base de las Directrices que rigen el uso de la línea presupuestaria A4103 de 1 de mayo de 2004, los beneficiarios de la ayuda complementaria para discapacitados son reembolsados en la medida en que se disponga de fondos suficientes y solo para una parte de los costes soportados (del 5 % al 35 %). Por lo tanto, los beneficiarios potenciales están obligados a hacer una contribución que depende de los ingresos familiares imponibles. El Defensor del Pueblo observa que estas normas se aplican a los gastos de educación especial para los niños discapacitados, así como a los gastos de transporte o tutoría.



2.6 En cuanto a los costos de la educación especial para los niños discapacitados, el Defensor del Pueblo señala que esta cuestión fue objeto de su investigación sobre la queja 1391/2002/JMA, que dio lugar a un informe especial presentado al Parlamento el 27 de mayo de 2005. En su informe especial, el Defensor del Pueblo recomendó a la Comisión que adoptara las medidas necesarias para garantizar que los padres de niños del SEN excluidos de las Escuelas Europeas debido a su grado de discapacidad no estuvieran obligados a contribuir a los costes educativos de sus hijos. El Defensor del Pueblo observa también que, mediante la resolución A6-0118/2006 aprobada el 20 de marzo de 2006, el Parlamento hizo suyas las conclusiones del Defensor del Pueblo. En la misma resolución, el Parlamento pidió a la Comisión que adoptara las medidas necesarias para reembolsar el coste total de la prestación educativa especial a los padres de niños con ENE excluidos de las Escuelas Europeas debido a su grado de discapacidad. Añadió que tales reembolsos deberían formar parte de una política europea de protección social.

2.7 En relación con la distribución de ayudas complementarias para discapacitados en la línea presupuestaria A4103, el Defensor del Pueblo observa la opinión de la Comisión de que no tiene la obligación legal de reembolsar todos los costes derivados de una discapacidad, y que la contribución personal prevista en las Directrices (del 5 % al 35 %) no debe considerarse socialmente injusta, ya que se calcula sobre la base de los ingresos familiares imponibles.

El Defensor del Pueblo observa, sin embargo, que, a pesar de su posición declarada, la Comisión se ha comprometido a proporcionar el reembolso íntegro de los costes vinculados a una desventaja a condición de que la Autoridad Presupuestaria garantice la disponibilidad de fondos suficientes y de que se alcance un acuerdo interinstitucional sobre una propuesta revisada de las directrices.

En vista de la preocupación pública por este aspecto de su investigación, el Defensor del Pueblo confía en que la Comisión tomará las medidas necesarias para tratar de persuadir a la autoridad presupuestaria de la necesidad de ampliar el ámbito de aplicación de la línea presupuestaria A4103 a fin de garantizar que los funcionarios con discapacidad o con familiares discapacitados puedan obtener un reembolso completo de los costes relacionados con una discapacidad.

2.8 El Defensor del Pueblo señala que, en el contexto de la designación de 2007 como Año Europeo de la Igualdad de Oportunidades para Todos, la Comisión se ha comprometido a presentar una Comunicación sobre «Igualdad de oportunidades para todos», que debería abordar, entre otras cosas, las cuestiones relativas al apoyo financiero prestado a los funcionarios con discapacidad o a los miembros de la familia con discapacidad. Aunque esta Comunicación no parece haber sido publicada todavía, el Defensor del Pueblo considera que el documento debería dar a la Comisión la oportunidad de confirmar que se toma en serio sus compromisos y está dispuesto a actuar al respecto.

Habida cuenta de la situación, el Defensor del Pueblo ha llegado a la conclusión de que, en la actualidad, no parece necesario adoptar más medidas en relación con este aspecto del asunto.



Contratación

2.9 El Defensor del Pueblo considera que en los últimos años se ha avanzado mucho en el acceso de las personas con discapacidad a la función pública europea, en particular tras la creación de la Oficina Europea de Selección de Personal («EPSO»).

2.10 El Defensor del Pueblo es consciente de que, como ha declarado la Comisión, la EPSO parece haber aplicado efectivamente numerosas medidas destinadas a facilitar la participación de los candidatos con discapacidad en los procedimientos de contratación. En este sentido, el Defensor del Pueblo acoge con satisfacción el hecho de que todas las convocatorias de oposición incluyan un párrafo estándar en el que se recuerde a los candidatos el carácter no discriminatorio de la política de contratación de la Unión, y que se invite a los candidatos con discapacidad a presentar un certificado para que los tribunales de selección puedan adoptar las medidas necesarias para facilitar su participación. También parece positivo que la «Guía para los solicitantes», publicada al mismo tiempo que cada convocatoria de oposición, incluya una sección que recuerda a los candidatos con discapacidad la oportunidad de solicitar arreglos especiales debido a su discapacidad. Además, el sitio web de la EPSO hace referencia directa a la igualdad de oportunidades. Lo mismo se aplica a todos los anuncios que aparecen en los medios de comunicación cuando se anuncia un concurso.

El Defensor del Pueblo también acoge con satisfacción la iniciativa de la EPSO de adoptar una serie de medidas prácticas destinadas a garantizar la correcta aplicación de su política de no discriminación. Un ejemplo ilustrativo de tales medidas prácticas es la disposición que permite la posibilidad de invitar a los candidatos con discapacidad a centros de pruebas separados.

2.11 A pesar de estos progresos aparentes, la opinión pública sigue preocupada por la falta de transparencia de las nuevas medidas y la necesidad de una evaluación más fiable de la situación. El Defensor del Pueblo observa que, en respuesta a su solicitud, la Comisión anunció que está revisando, conjuntamente con la EPSO, el contenido de su publicidad para la contratación. En esta revisión se estudiaría la posibilidad de elaborar informes sobre discapacidades específicas distintas de las discapacidades visuales, con miras a fomentar más solicitudes de personas con discapacidad.

El Defensor del Pueblo acoge con satisfacción el compromiso de la Comisión de estudiar la posibilidad de publicar informes más generales sobre la contratación de personas con discapacidad que incluyan estadísticas existentes y futuras, siempre que estos materiales respeten plenamente las obligaciones del [Reglamento \(CE\) n.º 45/2001 del \[Enlace\]](#) Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2000, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones y los organismos comunitarios y a la libre circulación de estos datos (74) . En opinión del Defensor del Pueblo, esta iniciativa contribuiría a que la política de la Comisión en este ámbito fuera más transparente y favorable a los ciudadanos, y estaría en consonancia con los llamamientos coherentes del Parlamento en favor de dicha acción (75) .



2.12 El Defensor del Pueblo observa que algunas observaciones presentadas por el público en el curso de su investigación criticaron el hecho de que la Comisión no hubiera favorecido una política más proactiva para la contratación de personas con discapacidad y, más en particular, la falta de desarrollo de algún tipo de acción positiva. El Defensor del Pueblo es consciente de que la Comisión, en la actualidad, no parece estar dispuesta a reservar un determinado porcentaje del número total de candidatos que contrata a personas con discapacidad.

Al revisar la política de la Comisión en este ámbito, el Defensor del Pueblo es consciente de que las prácticas existentes en los Estados miembros relativas a la aplicación de medidas de acción positiva muestran cierto grado de diversidad. Un número importante de Estados miembros de la UE, como Alemania, Austria, Bélgica (76), Chipre, la República Checa, Francia, Grecia, Italia, Lituania, Malta, Polonia, Portugal, Eslovenia y España han establecido sistemas de cuotas para el empleo de personas con discapacidad. Otros países europeos han elegido un camino diferente para promover la integración de este grupo de personas en el entorno laboral (77). El Defensor del Pueblo espera que, al tratar de formular su propia política al respecto, la Comisión siga de cerca la situación existente en los Estados miembros y su evolución a lo largo del tiempo.

En este contexto, el Defensor del Pueblo considera importante subrayar que la Comisión se ha comprometido a explorar los diversos medios para promover la contratación de personas con discapacidad dentro de la institución. A este respecto, la Comisión se ha referido a una serie de ejemplos que incluyen el establecimiento de algún tipo de objetivo de empleo para las personas con discapacidad, o el seguimiento individual por parte de la administración, tras el examen médico, para garantizar asignaciones y equipos adecuados.

Habida cuenta de la situación, el Defensor del Pueblo ha llegado a la conclusión de que, en la actualidad, no parece necesario adoptar más medidas en relación con este aspecto del asunto.

3 Accesibilidad de los locales de la Comisión

3.1 El Defensor del Pueblo observa con preocupación que la accesibilidad de los locales de la Comisión es un aspecto de su investigación que ha suscitado un gran interés del público que, en general, ha sido muy crítico con el historial de la Comisión en este ámbito.

3.2 Al parecer, la Comisión se comprometió a respetar los criterios establecidos tanto en la UE como en sus propios Códigos de Buenas Prácticas. En consecuencia, deben adoptarse todas las medidas razonables para reducir al mínimo los problemas relacionados con el acceso a los edificios, así como al alojamiento y el equipo de oficinas, de modo que las oficinas y las instalaciones sean accesibles para las personas con discapacidad.

El Defensor del Pueblo observa que, para alcanzar estos objetivos, la Comisión había anunciado que sus servicios, a saber, la Oficina de Infraestructuras y Logística («OIB») habían previsto llevar a cabo mejoras destinadas a facilitar el acceso de las personas con discapacidad a los locales de la Comisión. Estas mejoras deberían haber incluido nuevas normas para garantizar la accesibilidad de todos los edificios de la Comisión, en particular en lo que respecta



al acceso, el movimiento dentro de los edificios, la evacuación en caso de emergencia y las instalaciones sanitarias.

3.3 A pesar de estos compromisos, el Defensor del Pueblo recibió numerosas observaciones del público en las que se señalaban una serie de deficiencias en la política de la Comisión en este ámbito. Por ejemplo, el público criticó el hecho de que la institución no hubiera participado en una auditoría global de accesibilidad de todas las instituciones de la UE, y que su Comunicación sobre la política inmobiliaria y las infraestructuras en Bruselas había prestado poca atención a la cuestión de la accesibilidad para las personas con discapacidad (78) .

El Defensor del Pueblo también ha recibido diferentes reclamaciones sobre aspectos particulares de esta cuestión, como la accesibilidad de las plazas de aparcamiento de la Comisión o del centro de información de la UE en Rond Point Schuman, en Bruselas, a las personas con discapacidad. Estos casos muestran que la accesibilidad de los locales de la Comisión sigue siendo un problema que debe abordarse de manera más eficaz (79) .

3.4 El Defensor del Pueblo observa que, el 29 de junio de 2004, en respuesta a su pregunta, la Comisión anunció la adopción de nuevas normas sobre la accesibilidad de sus locales para las personas con discapacidad. En consecuencia, la última versión del manual de la Comisión sobre normas de construcción abordaba, en el capítulo B.III, los requisitos relativos a las personas con discapacidad. Estos requisitos respetan plenamente las normas establecidas por la legislación de la UE y Bélgica, y cubren cuestiones generales de acceso, plazas de aparcamiento reservadas, movilidad, iluminación y señalización en edificios, instalaciones sanitarias y evacuación de emergencia. El Defensor del Pueblo también reconoce que la Comisión se ha comprometido a buscar nuevos avances en lo que respecta a la disponibilidad de plazas de aparcamiento para personas con discapacidad, ya sea en todos sus edificios o cerca de ellos.

El Defensor del Pueblo confía en que los compromisos asumidos por la Comisión deben abordar adecuadamente las preocupaciones expresadas por el público. El Defensor del Pueblo confía también en que la Comisión supervisará la situación, haciendo los ajustes necesarios en sus políticas y prácticas a lo largo del tiempo, a la luz de la situación y teniendo debidamente en cuenta la opinión pública.

En vista de lo anterior, el Defensor del Pueblo ha llegado a la conclusión de que, en la actualidad, no parece necesario adoptar más medidas en relación con este aspecto del asunto.

4 Información y comunicación

4.1 El Defensor del Pueblo observa que el acceso a la información es una condición previa para la participación democrática en cualquier nivel político. Habida cuenta de que la Comisión constituye una de las principales fuentes de información sobre asuntos de la UE, es de suma importancia que las personas con discapacidad puedan acceder fácilmente a este tipo de información como medio para garantizar su participación en la vida democrática de la Unión. Por lo tanto, la accesibilidad de los documentos y el sitio web de la Comisión adquiere especial



importancia para garantizar que las personas con discapacidad no sean discriminadas.

El Defensor del Pueblo señala que, para alcanzar los objetivos mencionados, la Comisión se comprometió, en su Código de Buenas Prácticas, a modificar las directrices sobre el acceso a los documentos para garantizar que las publicaciones y la información sean accesibles para las personas con discapacidad en formatos alternativos. Del mismo modo, la Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas debía velar por que los ciudadanos con discapacidad tuvieran pleno acceso a su información. Como resultado de estos compromisos, la Comisión adoptó, en septiembre de 2001, una comunicación destinada a hacer que los sitios web sean más accesibles para las personas mayores y las personas con discapacidad (80) .

4.2 El Defensor del Pueblo reconoce que la Comisión ha avanzado mucho en la accesibilidad de su información para las personas con discapacidad. Esto es especialmente cierto en el caso de la información contenida en la página web de la Comisión. El Defensor del Pueblo acoge con satisfacción la iniciativa de la Comisión de adoptar una norma de alto nivel, la denominada reclamación de nivel de conformidad A (Prioridad 1-WAI («Iniciativa de Accesibilidad Web»)), para sitios web nuevos y actualizados alojados en su servidor EUROPA. Esta iniciativa debe facilitar el uso de los sitios web comunitarios no solo por las personas con discapacidad visual, sino también por las personas con otras discapacidades y discapacidades. El Defensor del Pueblo también observa que la Comisión se ha comprometido a garantizar que los autores de páginas del sitio web de EUROPA, como los administradores de direcciones generales y servicios, apliquen las normas establecidas en la Guía para los proveedores de información (IPG), a fin de garantizar la prestación de un servicio coherente y fácil de usar.

4.3 El Defensor del Pueblo es consciente de que el público ha criticado el grado de accesibilidad de la información de la Comisión y ha subrayado la necesidad de ponerla a disposición no solo de las personas con discapacidad visual, sino también del mayor número posible de personas con discapacidad.

El Defensor del Pueblo observa, sin embargo, que la Comisión ha adoptado una serie de iniciativas para responder a estas preocupaciones y está tratando de incorporar el software de usuario final adecuado para garantizar que la información contenida en las páginas EUROPA compatibles con WAI se utilice para crear grandes impresiones, Braille, formatos electrónicos y de audio.

4.4 No obstante, el Defensor del Pueblo desea llamar la atención de la Comisión sobre el hecho de que el interés del público en esta cuestión no se ha centrado exclusivamente en la información facilitada a través de Internet.

El Defensor del Pueblo observa que la Comisión también produce una parte significativa de sus materiales en papel. Al parecer, en Braille se han elaborado una serie de documentos, como el Libro Blanco sobre la reforma de la Comisión y el documento consultivo sobre la mejora de los mecanismos de trabajo para las personas con discapacidad. El Defensor del Pueblo considera este esfuerzo encomiable y espera que pueda ampliarse en el futuro.



El Defensor del Pueblo es consciente del hecho de que muchas personas con discapacidad desean que la Comisión vele por que haya más documentos de la UE disponibles en una serie de formatos alternativos, como el Braille, la letra grande, el audio y los formatos electrónicos. El Defensor del Pueblo confía en que la Comisión, en coordinación con la Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas, trate de responder a esta preocupación pública.

Habida cuenta de la situación, el Defensor del Pueblo ha llegado a la conclusión de que, en la actualidad, no parece necesario adoptar más medidas en relación con este aspecto del asunto.

5 Integración de los niños con discapacidad por las Escuelas Europeas

5.1 El Defensor del Pueblo observa con preocupación que su aspecto de su investigación atrajo una atención pública considerable. En general, la opinión pública ha criticado tanto a la Comisión como a las Escuelas Europeas por no haber puesto efectivamente en práctica sus compromisos declarados con respecto a la integración real de los alumnos del SEN en la vida escolar.

El Defensor del Pueblo siempre ha considerado que las Escuelas Europeas no son una institución u órgano comunitario y, por lo tanto, no están dentro de su mandato en virtud del artículo 195 del Tratado CE. Sin embargo, el Defensor del Pueblo también ha señalado que la Comisión tiene una cierta responsabilidad en el funcionamiento de las Escuelas Europeas, ya que está representada en su Consejo de Gobernadores y contribuye en gran medida a su financiación. En consecuencia, el Defensor del Pueblo considera que la Comisión tiene la responsabilidad general de promover una buena administración en las Escuelas Europeas. Esta responsabilidad incluye la obligación de promover una política no discriminatoria hacia los alumnos con discapacidad de las Escuelas Europeas, destinada a garantizar su plena integración en las Escuelas. En este sentido, el Defensor del Pueblo observa que, en su Código de Buenas Prácticas, la Comisión se ha comprometido a apoyar los esfuerzos realizados por las Escuelas Europeas con vistas a integrar mejor a los alumnos con discapacidad.

5.2 Al parecer, los criterios de la política de las Escuelas Europeas sobre los niños del SEN se establecieron por primera vez en un programa educativo que data de 1999. El programa abordó tanto el aprendizaje como las discapacidades físicas, con el fin de integrar en la vida escolar a los estudiantes del SEN en la medida de lo posible, por medio de profesores especializados que prestan asistencia en clase a los alumnos. En consecuencia, un consejo especial integrado por el director, los profesores, los padres y, por lo general, un especialista médico, debía decidir un programa a medida, basado en la capacidad y las necesidades del alumno, para cada estudiante del SEN. El resultado de este proceso fue un contrato, renovable anualmente, en el que se describían las responsabilidades asumidas por cada parte.

A la luz de las observaciones formuladas por el público en el curso de la investigación del Defensor del Pueblo, parece que la aplicación de este programa ha generado preocupación pública y que se han identificado una serie de problemas, entre ellos el hecho de que las



escuelas no acepten a los niños del SEN por carecer de conocimientos técnicos o de recursos humanos para hacer frente a algunos tipos de discapacidad; II) establecer un programa integral para los niños del SEN y realizar esfuerzos reales para promover una educación más inclusiva; y iii) proporcionar personal cualificado y apoyo para integrar a los niños del SEN.

5.3 El Defensor del Pueblo ya ha revisado la política de las Escuelas Europeas para la integración de los niños con discapacidad en el contexto de una reclamación anterior (1391/2002/JMA), en la que una de las alegaciones era que las Escuelas Europeas no habían establecido un sistema educativo integrado y unificado para atender las necesidades de todos los niños del SEN. Como resultado de su investigación, el Defensor del Pueblo presentó un informe especial al Parlamento el 27 de mayo de 2005 (81) . En el contexto de la preparación de este informe, el Defensor del Pueblo constató que no parecía haber ninguna disposición legal vinculante que obligue a la Comisión a establecer un sistema educativo unificado. A falta de tal base jurídica, el Defensor del Pueblo no pudo concluir que la Comisión no hubiera actuado correctamente al no garantizar que las Escuelas Europeas proporcionaran programas educativos para todos los hijos del SEN de funcionarios de la UE (82) . A pesar de esta conclusión, el Defensor del Pueblo también señaló la incoherencia entre la práctica de las Escuelas y los compromisos públicos asumidos por la UE en general (83) , y por la Comisión en particular (84) , en apoyo de un sistema educativo integrado.

5.4 El Defensor del Pueblo observa que, en respuesta a las observaciones formuladas por el público, la Comisión ha explicado que el Consejo de Gobernadores de las Escuelas aprobó en febrero de 2005 un nuevo documento titulado «Integración de los alumnos del SEN en las Escuelas Europeas» (85) . Se espera que este documento sirva de base para una política revisada en este ámbito. Como se indica en su Preámbulo, las nuevas directrices buscaban adaptar los procedimientos de admisión e integración de los alumnos con discapacidades de aprendizaje e introducir mejoras e innovaciones en el sistema diseñado para abordar los desafíos asociados a un número creciente de alumnos del SEN.

El Defensor del Pueblo recuerda que pidió a la Comisión que explicara cómo se proponía evaluar los resultados de la nueva política de las Escuelas Europeas para la integración de los niños del SEN y que indicara un calendario para dicha evaluación. A este respecto, el Defensor del Pueblo observa con preocupación que la respuesta de la Comisión no contiene información que pueda demostrar que las Escuelas Europeas han cambiado de rumbo o que sus esfuerzos por integrar a los alumnos del SEN están dando frutos de manera efectiva. El Defensor del Pueblo señala que la Comisión se ha limitado a afirmar que, en varias ocasiones, había solicitado sin éxito que se revisara el programa SEN de las Escuelas.

5.5 A la luz de lo anterior, el Defensor del Pueblo considera que no dispone de información suficiente para concluir que la nueva política ha respondido adecuadamente a las preocupaciones expresadas por el público. A falta de dicha información, el Defensor del Pueblo desea llamar la atención de la Comisión sobre una serie de cuestiones relativas a la política de las escuelas para la integración de los alumnos discapacitados, a las que el público parece conceder gran importancia. Estos incluyen:

- B) La opinión de que la estrategia educativa para los niños de las ENE debería basarse en un



enfoque de «integración preventiva»;

- la preocupación por el hecho de que la renovación anual de la convención en la que se establecen programas individuales para los niños del SEN genera incertidumbre entre los padres acerca de la evolución de la situación a lo largo del tiempo;
- la necesidad de que las Escuelas elaboren programas adecuados para ciertas dificultades de aprendizaje, como la dislexia, que requieren una formación adecuada en el servicio sobre cómo apoyar a los alumnos en sus clases;
- el riesgo de que los padres de niños con ENS puedan ser excluidos del grupo asesor del SEN de las escuelas debido a que no reciben suficiente información sobre la situación y el progreso eventual de sus hijos; y,
- la falta de coherencia en la forma en que las Escuelas individuales implementan la política de las Escuelas hacia los niños SEN, y la necesidad de crear una posición de coordinador del SEN en cada una de las Escuelas.

5.6 El Defensor del Pueblo considera que la Comisión debe tener debidamente en cuenta las preocupaciones mencionadas con vistas a promover soluciones adecuadas en el contexto de las decisiones políticas que debe adoptar el Consejo de Administración de las Escuelas Europeas. Por lo tanto, con el fin de seguir de cerca la evolución de esta situación en un futuro próximo, el Defensor del Pueblo considera necesario que la Comisión informe sobre los progresos realizados en la integración de los niños con discapacidad por parte de las Escuelas Europeas antes de finales de 2007. Este informe permitirá al Defensor del Pueblo decidir si es necesario adoptar nuevas medidas en relación con esta cuestión. El Defensor del Pueblo tiene la intención de publicar este informe en su sitio web, a fin de informar a los ciudadanos de su contenido.

6 Coordinación interna

6.1 Dado que una discapacidad parece ser el resultado de una interacción compleja entre un problema de salud o una limitación funcional y su entorno social, político, cultural, económico y físico (86) , la integración de las personas con discapacidad requiere medidas en una amplia gama de ámbitos, como la atención de la salud, la educación, el empleo, el transporte, la vivienda o la protección social y jurídica, entre otros.

Por consiguiente, una acción eficaz contra la discriminación por motivos de discapacidad requiere que los diferentes departamentos interesados actúen de manera coordinada y, de hecho, que se cree una entidad administrativa separada capaz de servir de centro de coordinación para todas las cuestiones relativas a la discapacidad con el fin de mejorar y desarrollar un enfoque general (87) . La ausencia de un enfoque integrado puede dificultar la obtención de información sobre los programas existentes y, en consecuencia, impedir que las personas con discapacidad ejerzan adecuadamente sus derechos.

6.2 El Defensor del Pueblo señala que la UE en su conjunto, así como el Código de Buenas Prácticas y la Comunicación de la Comisión sobre las Personas con Discapacidad parecen compartir esta perspectiva general. Prevé una estrategia global e integrada para luchar contra posibles casos de discriminación contra las personas con discapacidad, incluido el



nombramiento de un funcionario u organismo en cada institución de la UE para que sea responsable de la aplicación de dicha estrategia.

6.3 Un enfoque integrado también requiere que la información se ponga a disposición de todos los servicios dentro de la administración, a fin de que puedan contribuir a evitar posibles problemas laborales para el personal con discapacidad. El Defensor del Pueblo observa que, en su Código de Buenas Prácticas, la Comisión acordó proporcionar formación y sensibilización a través de cursos de formación sobre discapacidad, así como seguir mejorando los procedimientos para la correcta aplicación de su Código a todos los niveles. A tal fin, la Comisión se comprometió a realizar encuestas periódicas.

6.4 El Defensor del Pueblo observa que, hasta la fecha, solo se ha realizado una encuesta, a saber, la de diciembre de 2004. Según la encuesta, el personal con discapacidad indicó que había recibido un trato menos favorable debido a su condición, lo que había dado lugar a un desarrollo profesional más lento, a un trabajo menos interesante o a la falta de acceso a la capacitación. La encuesta reveló que, a nivel interpersonal, varios empleados experimentaron un comportamiento de superiores y colegas que sentían que era humillante, intimidante u ofensivo. El personal también consideró que había tenido dificultades para conseguir tipos de alojamiento relativamente sencillos para su trabajo, como sillas o mesas de oficina adecuadas, equipos informáticos adaptados o para garantizar el acceso a los edificios o dentro de ellos.

El Defensor del Pueblo acoge con satisfacción la iniciativa de la Comisión de incluir la encuesta y sus resultados, así como su Guía práctica sobre buenas prácticas, en su sitio web de la intranet, en un esfuerzo por sensibilizar al personal sobre las cuestiones planteadas y contribuir a lograr cambios.

El Defensor del Pueblo observa que la Comisión está estudiando actualmente la posibilidad de llevar a cabo una nueva encuesta para el período 2007-2008. El Defensor del Pueblo confía en que, en el marco de esa futura encuesta, la Comisión considere útil tener en cuenta algunas de las críticas expresadas por el público en relación con la aplicación de su Código de Buenas Prácticas. La Comisión también puede considerar la posibilidad de mejorar la representación de las organizaciones con discapacidad en el proceso de toma de decisiones centrándose en posibles reformas.

6.5 El Defensor del Pueblo señala que, en respuesta a sus preguntas, la Comisión ha publicado una Guía práctica sobre buenas prácticas en el ámbito de la no discriminación. Esta guía tiene por objeto informar a los directivos que tienen responsabilidades de contratación en las Direcciones Generales. Parece que, con el fin de sensibilizar al personal sobre las cuestiones e influir en el cambio, la guía se ha difundido en todos los servicios de la Comisión y también se ha publicado en el sitio web de la intranet de la Comisión.

El Defensor del Pueblo considera positivamente los esfuerzos de la Comisión por informar a los funcionarios y agentes a través de su sitio web de la intranet de que, si el personal no está satisfecho con la aplicación de su Código de Buenas Prácticas, un servicio específico, la Unidad de Igualdad de Oportunidades y No Discriminación de la Dirección General de Personal



y Administración de la Comisión, puede dirigirse con carácter confidencial. Este servicio está facultado para perseguir el objeto de la reclamación de la manera más adecuada.

6.6 En relación con los esfuerzos de la Comisión para sensibilizar sobre la discapacidad, el Defensor del Pueblo observa que la institución también ha anunciado su intención de organizar en el futuro acciones específicas de sensibilización mediante sesiones de formación y conferencias o seminarios para el personal. No obstante, el Defensor del Pueblo lamenta que, a pesar de sus compromisos, la Comisión no haya podido organizar hasta ahora cursos específicos sobre cuestiones de no discriminación, limitándose a organizar una serie de sesiones informativas para los tribunales de oposición.

El Defensor del Pueblo desea llamar la atención de la Comisión sobre el hecho de que, en las observaciones formuladas durante su investigación, el público apoyó firmemente la idea de que se organizara una formación para todos los miembros del personal que trabajan junto a las personas con discapacidad. El Defensor del Pueblo espera que la Comisión tenga debidamente en cuenta estas preocupaciones públicas para mejorar la formación que proporciona a su personal en materia de discapacidad.

En vista de lo anterior, el Defensor del Pueblo ha llegado a la conclusión de que, en la actualidad, no parece necesario adoptar más medidas en relación con este aspecto del asunto.

Este es el enfoque político seguido por Canadá y los Estados Unidos. Ambos países han tratado de desarrollar políticas de discapacidad plenamente integradas. En los Estados Unidos, esta responsabilidad recae en el Consejo Nacional de Discapacidad, organismo federal establecido en 1978, con la misión de promover políticas, programas, prácticas y procedimientos que garanticen la igualdad de oportunidades para todas las personas con discapacidad (www.ncd.gov/index.html). En el Canadá, esta tarea se asigna a la Oficina de Cuestiones de Discapacidad (ODI), que sirve de centro de coordinación dentro del Gobierno del Canadá para los principales asociados que trabajan para promover la plena participación de los canadienses con discapacidad en el aprendizaje, el trabajo y la vida comunitaria (www.hrsdc.gc.ca/en/gateways/nav/top_nav/program/odi.shtml).

7 Conclusión

7.1 El Defensor del Pueblo ha evaluado cuidadosamente las medidas de la Comisión para la integración de las personas con discapacidad mediante un diálogo abierto y transparente en el que las personas con discapacidad, los grupos representativos, otros defensores del pueblo a nivel nacional y regional y los ciudadanos han contribuido en gran medida.

7.2 Sobre la base de esa revisión, el Defensor del Pueblo considera que la Comisión ha hecho un esfuerzo real para integrar a las personas con discapacidad, incluso si ciertos aspectos de su política no parecen haber satisfecho las expectativas del público. El Defensor del Pueblo reconoce que se han logrado progresos en varias esferas, entre ellas las siguientes:

* garantizar que el empleo de personas con discapacidad por parte de todas las instituciones



de la UE respete los principios fundamentales consagrados en el nuevo Estatuto, como la no discriminación por motivos de discapacidad (artículo 1 quinquies, apartado 1), o la necesidad de proporcionar a los funcionarios con discapacidad ajustes razonables para que puedan desempeñar las tareas que se les asignan (artículo 1 quinquies, apartado 4);

* los candidatos a concursos de la UE con discapacidad ahora pueden beneficiarse de una serie de medidas para facilitar su participación; además, la Comisión se ha comprometido a explorar los diversos medios por los que se puede promover la contratación de personas con discapacidad dentro de la institución;

* la adopción de nuevos requisitos relativos a la accesibilidad de los locales de la Comisión, plenamente en consonancia con las normas establecidas por la legislación de la UE y Bélgica, y que aborden específicamente las necesidades de las personas con discapacidad;

* hacer más accesible la información para las personas con discapacidad, en particular por lo que se refiere a los datos publicados en el sitio web de la Comisión; la institución ha realizado esfuerzos encomiables en este sentido;

* la Comisión ha hecho esfuerzos para que sus servicios estén más en sintonía con las dificultades con que tropiezan las personas con discapacidad, de modo que puedan responder adecuadamente, si es necesario. En este sentido, el Código de Buenas Prácticas de la Comisión debe ser un instrumento muy útil para sensibilizar a su personal, aunque deben hacerse esfuerzos para garantizar el pleno respeto y actualización periódica de las normas de conducta.

7.3 El Defensor del Pueblo es consciente de que, como ha subrayado el público, sigue siendo necesario actuar en otros ámbitos, entre ellos los siguientes:

* el apoyo financiero prestado por la Comisión a funcionarios con discapacidad o con familiares discapacitados sigue considerándose insuficiente; el público también considera que debería aumentarse la dotación presupuestaria para los costes relacionados con la discapacidad;

* las medidas adoptadas para promover la contratación de personas discapacitadas parecen carecer de transparencia y se ha solicitado una evaluación más fiable de la situación;

* también parece haber insatisfacción con la insuficiente accesibilidad para algunas personas con discapacidad a la información de la Comisión;

* la situación de los alumnos con discapacidad en las Escuelas Europeas parece insuficiente y la política de las Escuelas para la integración de esta categoría de niños no parece haber contribuido eficazmente a su integración;

* la aplicación del Código de Buenas Prácticas de la Comisión ha puesto de manifiesto una serie de deficiencias, en particular por lo que se refiere al número insuficiente de medidas adoptadas para sensibilizar al personal de la institución mediante cursos de formación o



seminarios.

7.4 El Defensor del Pueblo es consciente de que la Comisión ha asumido una serie de compromisos para hacer frente a las preocupaciones públicas mencionadas. El Defensor del Pueblo observa que la Comisión se ha comprometido a:

- * proporcionar el reembolso íntegro de los costes relacionados con una desventaja; a condición de que la Autoridad Presupuestaria ponga a disposición fondos suficientes y de que se alcance un acuerdo interinstitucional;

- * considerar la posibilidad de publicar informes más generales sobre la contratación de personas con discapacidad y en ellos deberían incluirse estadísticas existentes y futuras;

adoptar nuevas normas sobre la accesibilidad de sus instalaciones para personas con discapacidad y aumentar el número de plazas de aparcamiento para personas con discapacidad, ya sea en todos sus edificios o cerca de ellos;

- * organizar en el futuro acciones específicas de sensibilización a través de sesiones de formación y conferencias o seminarios para el personal.

Habida cuenta de los compromisos de la Comisión, el Defensor del Pueblo considera que, en la actualidad, no parece necesario adoptar nuevas medidas en relación con los aspectos mencionados.

7.5 No obstante, el Defensor del Pueblo considera que, en lo que respecta a la situación de los alumnos con discapacidad en las Escuelas Europeas, la situación sigue siendo insatisfactoria.

Por lo tanto, con el fin de seguir de cerca la evolución de esta situación en un futuro próximo, el Defensor del Pueblo considera necesario que la Comisión informe antes de finales de 2007 sobre los progresos realizados por las Escuelas Europeas en materia de integración de los niños con discapacidad. Este informe permitirá al Defensor del Pueblo decidir si es necesario adoptar nuevas medidas en relación con esta cuestión. Cabe señalar que el Defensor del Pueblo tiene la intención de publicar este informe en su sitio web, a fin de informar a los ciudadanos de su contenido.

Al abrir un debate público sobre la integración de las personas con discapacidad en la Comisión, el Defensor del Pueblo espera haber contribuido a acercar la voz de los ciudadanos discapacitados a las instituciones de la Unión. El Defensor del Pueblo espera que los resultados de su iniciativa ayuden a la Comisión a reevaluar algunas de sus acciones en este ámbito con el fin de corregirlas en caso necesario y, al hacerlo, servir mejor a todos los ciudadanos europeos.

En un esfuerzo por informar al mayor número posible de ciudadanos, el Defensor del Pueblo publicará en su sitio web la versión completa de esta decisión en inglés, así como un resumen de la misma en todas las lenguas oficiales de la UE.



La tuya sinceramente,

P. Nikiforos DIAMANDOUROS

(1) Resolución del Consejo y de los Representantes de los Gobiernos de los Estados miembros reunidos en el seno del Consejo, de 20 de diciembre de 1996, sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad (DO 1997, C 12, p. 1).

(2) Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones — Hacia una Europa sin barreras para las personas con discapacidad, COM(2000) 284 final de 12 de mayo de 2000.

(3) Resolución del Parlamento Europeo, de 4 de abril de 2001, sobre la Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones — Hacia una Europa sin barreras para las personas con discapacidad, COM(2000) 284 — C5-0632/2000-2000/2296 (COS).

(4) Decisión 2001/903/CE del Consejo, de 3 de diciembre de 2001, relativa al Año Europeo de las Personas con Discapacidad 2003, DO L 335, p. 15.

(5) Disponible en el sitio web de la Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e Igualdad de Oportunidades de la Comisión (http://europa.eu.int/comm/employment_social/soc-prot/disable/codehaen_en.htm [Enlace]).

(6) Nota 3 supra, Resolución del Parlamento de 4 de abril de 2001, apartado 35.

(7) Véanse las páginas 23 a 24 infra, así como el punto 6.4 de la parte de la Decisión.

(8) Philip Scott (8 de junio de 2004); Marie Luijten, Grupo de Apoyo a la Discapacidad PE (26 de mayo de 2004).

9) « *La asignación por hijo a cargo podrá duplicarse mediante una decisión motivada especial de la autoridad facultada para proceder a los nombramientos sobre la base de documentos médicos que demuestren que el hijo de que se trate sufre una discapacidad mental o física que implica al funcionario un gasto elevado.* »

(10) Véase, en particular, Nora Bednarski, Foro Europeo de la Discapacidad (FED), (19 de mayo de 2004).

(11) Marie Luijten, Grupo de Apoyo a la Discapacidad PE (26 de mayo de 2004).

(12) Pilar Villarino, Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad



(CERMI), (31 de mayo de 2004).

(13) COM (2003) 755 final.

(14) Marie Luijten, Grupo de Apoyo a la Discapacidad PE (26 de mayo de 2004).

(15) Supra nota 11, Sra. Pilar Villarino, CERMI.

(16) Pilar de la Peña García Tizón (23 de mayo de 2004).

(17) Foro Europeo de la Discapacidad (FED), (18 de mayo de 2004).

(18) Catrin Roberts, en nombre de Colin Low (Unión Europea de Ciegos, UER), (24 de septiembre de 2004), supra FED.

(19) Supra nota 18, EBU; nota 17 supra, FED.

(20) Supra nota 18, EBU.

(21) Andreas Klumpp (27 de julio de 2004); Marie Luijten, Grupo de Apoyo a la Discapacidad PE (26 de mayo de 2004); adenda a las observaciones del PE del Grupo de Apoyo a las Personas con Discapacidad (8 de junio de 2004); Colm Begley (28 de mayo de 2004); Sr. Y (1 de junio de 2004) confidencial; El Sr. y la Sra. Z (28 de julio de 2004) Confidencial.

(22) Andreas Klumpp (27 de julio de 2004).

(23) Supra nota a pie de página n.º 14, Marie Luijten, Grupo de Apoyo a las Personas con Discapacidad PE (26 de mayo de 2004); adenda a las observaciones del PE del Grupo de Apoyo a las Personas con Discapacidad (8 de junio de 2004).

(24) Supra nota a pie de página 14, Grupo de Apoyo a la Discapacidad PE; El Sr. y la Sra. Z (28 de julio de 2004) Confidencial.

(25) Colm Begley (28 de mayo de 2004); Sr. Y. (1 de junio de 2004) Confidencial.

(26) Carol McCarthy, DYSPEL asbl (21, 23 de febrero y 5 de marzo de 2004).

(27) Werner Salz, Pflanzinstitut für Hörsprachbehinderte (21 de mayo de 2004).

(28) Supra nota 26, DYSPEL asbl.

(29) Supra nota 26, DYSPEL asbl.

(30) Brigitte Holst (11 y 12 de mayo de 2004); Marie Luijten, Grupo de Apoyo a la Discapacidad PE (26 de mayo de 2004).



- (31) Supra nota 30, Brigitte Holst.
- (32) Supra nota 30, Brigitte Holst; Annica Floren (7 de mayo de 2004).
- (33) Nora Bednarski, Foro Europeo de la Discapacidad (19 de mayo de 2004).
- (34) Pierrette Hourthouat Bénacq, Association Aide et Information aux Non et Mal Voyants (22 de diciembre de 2003).
- (35) Pilar Villarino, Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) (31 de mayo de 2004).
- (36) Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones — Hacia una Europa sin barreras para las personas con discapacidad, COM/2000/0284 final de 12 de mayo de 2000.
- (37) Véase el punto 1.5 de la Decisión del Defensor del Pueblo Europeo sobre el asunto 1391/2002/JMA (<http://www.ombudsman.europa.eu/decision/en/021391.htm> [Enlace]).
- (38) Resolución del Consejo y de los Ministros de Educación reunidos en el seno del Consejo de 31 de mayo de 1990 relativa a la integración de los niños y jóvenes con discapacidad en los sistemas educativos ordinarios; DO 1990, C 162, p. 2. En el punto 2 de la Resolución se recomendaba a los Estados miembros que:
- « La plena integración en el sistema de educación general debe considerarse una primera opción en todos los casos apropiados, y todos los centros educativos deben estar en condiciones de responder a las necesidades de los alumnos y estudiantes con discapacidad ».*
- (39) Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones « *Hacia una Europa sin barreras para las personas con discapacidad* » COM(2000) 284 final de 12 de mayo de 2000.
- (40) Supra nota 39, Comunicación, Sección 4.3.d (Incorporación en las Escuelas Europeas), p. 19.
- (41) Referencia: 2003-D-4710-en-6. Este documento puede consultarse en el sitio web de las Escuelas Europeas (http://www.eursec.org/SE/htmlEn/IndexEn_home.html [Enlace]).
- (42) Supra nota 14, Marie Luijten, Grupo de Apoyo a la Discapacidad PE (26 de mayo de 2004).
- (43) El texto completo de la Comunicación administrativa 69-2004 está disponible en el sitio web intracomm de la Comisión, al que no pueden acceder terceros (http://www.cc.cec/guide/publications/infoadm/2004/ia04069_en.html).



(44) Véase más adelante, p. 25, así como el punto 2.8 de la parte de la decisión.

45) « *Las instituciones de la Unión Europea aplican una política de igualdad de oportunidades y aceptan solicitudes sin distinción por motivos de sexo, raza, color, origen étnico o social, características genéticas, idioma, convicciones u opiniones religiosas, políticas o de otro tipo, pertenecientes a una minoría nacional, situación financiera, nacimiento, discapacidad, edad, orientación sexual, estado civil o situación familiar.* »

(46) " *Si tiene una discapacidad que le impide registrarse en línea, puede solicitar, preferiblemente por fax, una versión en papel del formulario, que debe rellenar, firmar y devolver por correo certificado, a más tardar en la fecha límite para la inscripción. Toda la comunicación posterior entre EPSO y usted será por correo postal. Debe adjuntar a su formulario de solicitud un certificado que acredite su discapacidad, expedido por un organismo reconocido. También debe establecer en una hoja de papel separada cualquier arreglo especial que considere necesario para facilitarle la participación en las pruebas .*

(47) Texto en Braille; texto escrito en fuente más grande; el candidato puede traer su propio PC que puede leer Braille; para las pruebas, el vigilante podrá leer las preguntas y respuestas propuestas, el candidato dará su respuesta y el vigilante lo indicará en el formulario del lector óptico; grabación de audio; tiempo extra dado.

(48) Posibilidad de estar sentado en la parte delantera del centro de examen para leer los labios del portavoz; tener una copia del texto del portavoz y tener un vigilante individual a su disposición.

(49) Tener un ordenador a disposición del candidato y poder imprimir las respuestas; o el candidato puede dar su respuesta verbalmente a un vigilante y con el uso de la grabación de audio.

(50) La EPSO se asegura de que el candidato tenga acceso al centro de exámenes sin ningún obstáculo.

(51) Tiempo adicional dado para tomar las pruebas; un ordenador, un titular de un documento, una plaza de aparcamiento puesta a disposición del candidato; se puede proporcionar una silla ergonómica.

(52) Un PC se pone a disposición del candidato para escribir la prueba y se da tiempo extra.

(53) DO L 8, p. 1.

(54) Véase el punto 3.3 de la parte de la Decisión.

(55) La Política de Accesibilidad Web de EUROPA está disponible en el sitio web Europa (http://europa.eu/geninfo/accessibility_policy_en.htm [Enlace]).



(56) Las normas IPG están disponibles en el sitio web Europa (http://ec.europa.eu/ipg/index_en.htm [Enlace]).

(57) Véanse los puntos 4.2 a 4.4 de la parte de la Decisión.

(58) La Junta está integrada por 31 miembros con derecho de voto. La Comisión tiene un voto, al igual que cada uno de los 27 Estados miembros, y los representantes de las asociaciones de padres y el personal. Para asuntos educativos, dos miembros adicionales que representan a los estudiantes y los directores de las Escuelas pueden participar en las reuniones de la Junta, aunque solo como observadores.

(59) Véanse más adelante la página 25, así como los puntos 5.4 a 5.6 de la parte de la decisión.

(60) Véanse más adelante la página 25, así como el punto 6.4 de la parte de la decisión.

(61) La encuesta está disponible en el sitio web intracomm de la Comisión, al que no pueden acceder terceros (http://www.cc.cec/pers_admin/equal_opp/disabled_fr.htm1).

(62) La Guía Práctica está disponible en el sitio web intracomm de la Comisión, al que no pueden acceder terceros (http://www.cc.cec/persadmin/equal_opp/documents/bat_goodpractice_fr.pdf).

(63) Véase el punto 6.4 de la parte de la Decisión.

(64) Véase, por ejemplo, el Programa de Acción Mundial de las Naciones Unidas para los Impedidos, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su 37.º período ordinario de sesiones, celebrado el 3 de diciembre de 1982 (resolución 37/52 1/); el informe anual de 2006 del Gobierno canadiense sobre sus progresos en materia de discapacidad, titulado «Avanzando la inclusión de las personas con discapacidad», que puede consultarse en el sitio web del Gobierno del Canadá (<http://www.hrsdc.gc.ca/en/hip/odi/documents/advancingInclusion06/introduction.shtml> [Enlace]).

(65) El Consejo de Europa ha estimado que el 10 %-15 % de la población total en Europa tiene una discapacidad. Véase la Recomendación Rec(2006)5 del Consejo de Europa del Comité de Ministros, de 5 de abril de 2006, «Plan de acción para promover los derechos y la plena participación de las personas con discapacidad en la sociedad: mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad en Europa 2006-2015».

En el caso de la Unión Europea, cerca de seis europeos de cada diez conocen a alguien, en círculos cercanos o más distantes, que se vea afectado por una enfermedad, discapacidad o invalidez de larga duración; y más del 5 % de los ciudadanos de la UE se consideran personas con discapacidad, Eurobarómetro (54.2/2001), informe sobre «Los europeos y la discapacidad».



(66) Resolución del Consejo y de los Representantes de los Gobiernos de los Estados miembros reunidos en el seno del Consejo, de 20 de diciembre de 1996, sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad (DO 1997, C 12, p. 1).

(67) Supra nota 65, Eurobarómetro (54.2/2001).

(68) El Código de Buenas Prácticas de la UE puede consultarse en el sitio web de la Comisión (http://europa.eu.int/comm/employment_social/soc-prot/disable/codehaen_en.htm [Enlace]).

(69) Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones — Hacia una Europa sin barreras para las personas con discapacidad, COM/2000/284 final de 12 de mayo de 2000.

(70) Resolución del Parlamento Europeo, de 4 de abril de 2001, sobre la Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones — Hacia una Europa sin barreras para las personas con discapacidad, COM(2000) 284 — C5-0632/2000-2000/2296 (COS).

(71) Supra nota 63, Resolución del Parlamento de 4 de abril de 2001, apartado 35.

(72) « *El Consejo, por unanimidad y a propuesta de la Comisión y previa consulta al Parlamento Europeo, podrá adoptar las medidas adecuadas para luchar contra la discriminación por motivos de sexo, origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual.* »

(73) La Comunicación administrativa 69-2004 está disponible en el sitio web intracomm de la Comisión, al que no pueden acceder terceros (http://www.cc.cec/guide/publications/infoadm/2004/ia04069_en.html).

(74) DO L 8, p. 1.

(75) Supra nota 70, Resolución del Parlamento de 4 de abril de 2001, apartado 35.

(76) Solo el sector público.

(77) " *Desarrollo de la ley contra la discriminación en Europa. Los 25 Estados miembros de la UE compararon* ", informe elaborado por Mark Bell, Isabelle Chopin y Fiona Palmer para la Red Europea de Expertos Independientes en el ámbito de la no discriminación, noviembre de 2006.

(78) COM (2003) 755 final.

(79) Véanse las decisiones sobre las reclamaciones 2415/2003/JMA y 1125/2006/JMA.

(80) "eEurope 2002: Accesibilidad de los sitios web públicos y su contenido».



(81) Véase el punto 2.6 supra de la presente Decisión.

(82) Véase el punto 1.5 de la decisión del Defensor del Pueblo en el asunto 1391/2002/JMA.

(83) Resolución del Consejo y de los Ministros de Educación reunidos en el seno del Consejo de 31 de mayo de 1990 relativa a la integración de los niños y jóvenes con discapacidad en los sistemas educativos ordinarios; DO 1990, C 162, p. 2. En el punto 2 de la Resolución se recomendaba a los Estados miembros que,

« la plena integración en el sistema de educación general debe considerarse una primera opción en todos los casos apropiados, y todos los centros educativos deben estar en condiciones de responder a las necesidades de los alumnos y estudiantes con discapacidad ».

(84) Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones « *Hacia una Europa sin barreras para las personas con discapacidad* » COM(2000) 284 final de 12 de mayo de 2000.

(85) Referencia: 2003-D-4710-en-6. El presente documento puede consultarse en el sitio web de las Escuelas Europeas (http://www.eursc.org/SE/htmlEn/IndexEn_home.html [Enlace]).

(86) Véase la nota 64 supra, Programa de Acción Mundial de las Naciones Unidas para las Personas con Discapacidad.

(87) Supra nota 65, Recomendación del Consejo de Europa Rec(2006)5 del Comité de Ministros de 5 de abril de 2006.

Este es el enfoque político seguido por Canadá y los Estados Unidos. Ambos países han tratado de desarrollar políticas de discapacidad plenamente integradas. En los Estados Unidos, esta responsabilidad recae en el Consejo Nacional de Discapacidad, organismo federal establecido en 1978, con la misión de promover políticas, programas, prácticas y procedimientos que garanticen la igualdad de oportunidades para todas las personas con discapacidad (www.ncd.gov/index.html). En el Canadá, esta tarea se asigna a la Oficina de Cuestiones de Discapacidad (ODI), que sirve de centro de coordinación dentro del Gobierno del Canadá para los principales asociados que trabajan para promover la plena participación de los canadienses con discapacidad en el aprendizaje, el trabajo y la vida comunitaria (http://www.hrsdc.gc.ca/en/gateways/nav/top_nav/program/odi.shtml [Enlace]).